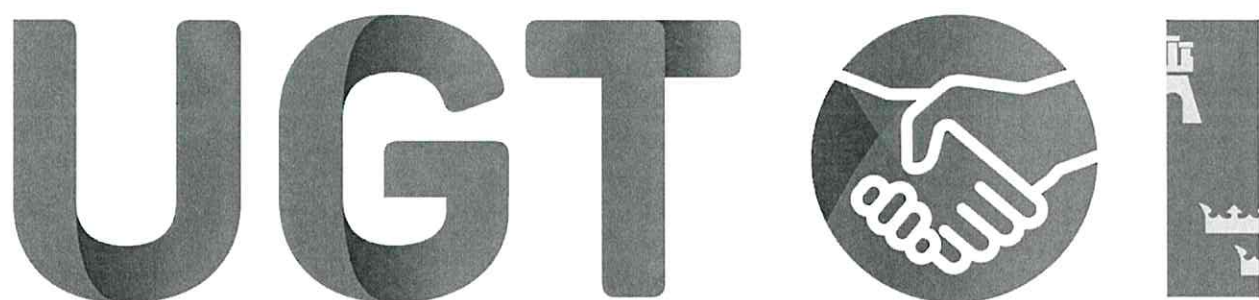


RESUMEN DE PRENSA



Región de Murcia

Vicesecretaría general y Secretaría de Comunicación y
Participación Sindical

Departamento de Comunicación y Redes Sociales

23/09/2022

Para el 23 de septiembre de 2022

- Francisco Moreno Alcayna se reúne con el Director General de Energía y Actividad Industrial y Minera, Horacio Sánchez Navarro

Francisco Moreno Alcayna, Secretario de Política Industrial de UGT Región de Murcia, se reúne con el Director General de Energía y Actividad Industrial y Minera, Horacio Sánchez Navarro, para tratar sobre el Plan Industrial de la Región de Murcia.

La reunión tendrá lugar el viernes 23 de septiembre de 2022, a partir de las 13.00 horas, en la sede de dicha Dirección General (C/ Nuevas Tecnologías, s/n, Murcia).

López Miras también prevé eliminar antes de fin de año el impuesto de Patrimonio

El presidente seguirá los pasos de Madrid y Andalucía con una exoneración fiscal que beneficiaría a 4.000 contribuyentes

MANUEL BUITRAGO



MURCIA. El Gobierno regional se suma a la ofensiva fiscal del PP por partida doble: ayer aprobó la rebaja del tramo autonómico del IRPF y, a la vez, apuntó que antes de fin de año eliminará el impuesto de Patrimonio, siguiendo la senda de la Comunidad de Madrid y de Andalucía. En mitad de la creciente refriega fiscal entre el PP y el Gobierno central, el presidente López Miras ha dado un paso más en su política de recorte de impuestos y manifestó a Telecinco que quiere utilizar «la mayor recaudación para devolverla a los ciudadanos en forma de bajada de impuestos. Hoy con la deflacción del IRPF; en las próximas semanas, antes de final de año, seguro que con la eliminación del impuesto de Patrimonio», declaró el presidente.

Días atrás, el Gobierno regional condicionó la supresión de este impuesto a una mejora de la financiación autonómica, dejando la puerta abierta y dando a entender que el proceso estaba en estudio. Tal condicionante parece que ha desaparecido en las últimas horas debido a la pugna fiscal de las comunidades gobernadas por el PP y la respuesta del Gobierno central de poner un impuesto a los ricos.

Realizando los cálculos

Fiel a su política de rebajar impuestos y de alardear de los resultados que dice obtener, el Gobierno de López Miras no piensa quedarse atrás en esta carrera. El presidente de la Comunidad consideró que todas las administraciones están obteniendo mayores recaudaciones, tanto el Gobierno central (con más de 22.000 millones de euros), como las comunidades autónomas, y que esos ingresos extraordinarios deben

El jefe del Ejecutivo sostiene que existe un aumento de recaudación que debe destinarse a ayudar a las familias

servir para que la crisis «no asfixie más a las familias y que tengan que pagar más IRPF porque no tengan mayor poder adquisitivo. Es una cuestión de justicia y coherencia en mitad de la crisis. Sobre el impuesto de Patrimonio, la idea no es eliminarlo para recaudar menos. La experiencia nos dice que cuando se eliminan algunos impuestos que lastiman la inversión y la actividad económica,

se recauda más». Añadió que se ha comprobado en la Región de Murcia con la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. «En los dos últimos años, hemos recaudado 700 millones de euros más», puntualizó.

Al término de la reunión semanal del gabinete, el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, informó de que el Gobierno regional tiene ahora «en estudio» la eli-

minación del impuesto de Patrimonio, aunque no precisó si tal supresión se llevará a cabo antes de que finalice esta legislatura. «Estamos realizando los cálculos en estos momentos», dijo.

El presidente, no obstante, fue algo más preciso al indicar en varias entrevistas concedidas por la mañana que la supresión de dicho gravamen se acometerá las próximas semanas o, en cualquier caso,

antes de fin de año, como dijo en Telecinco. Previamente, el presidente fue menos preciso en su declaración a Televisión Española. Dijo que su Ejecutivo abordará «muy probablemente» para el próximo ejercicio 2023 la eliminación del impuesto de Patrimonio, «compensándolo con los ingresos extraordinarios» que lleguen a la Comunidad. «Ni nosotros, ni ningún otro gobierno, puede tomar una



Los consejeros de Presidencia y Hacienda, Marcos Ortuño y Luis Alberto Marín, ayer, tras el Consejo de Gobierno. ROS CAVAL / AGF

La rebaja del tramo autonómico del IRPF supondrá un ahorro de 10 millones

El consejero Marín considera más importante lo que se tributaría de más si no se deflacta la tarifa

M. B. B.

MURCIA. El Consejo de Gobierno aprobó como estaba previsto la deflacción del tramo autonómico del IRPF. El consejero Luis Alberto Marín explicó en rueda de prensa que esta medida se suma a la rebaja de la tarifa autonómica aprobada para el período 2019-2023, que supone un

ahorro total de 54 millones de euros a los murcianos. Invitó al Gobierno de la nación a que haga lo mismo en el tramo estatal.

Señaló que la deflacción de los cuatro primeros tramos (hay cinco) de la tarifa del IRPF en un 4,1% busca evitar «una mayor tributación de los contribuyentes por la subida de las retribuciones sin que aumente su capacidad económica o incluso siendo inferior». Indicó que va dirigida a las familias con rentas bajas y medias, «que son las que tienen más difícil llegar a final de mes por la subida de los precios».

El porcentaje de deflacción

toma en consideración el incremento del coste salarial ordinario estimado para 2022, fijándose en el 4,1%, y supondrá un ahorro para más de 330.000 contribuyentes murcianos de entre 8,5 y 10 millones de euros. Repercutirá en una media de 25 a 30 euros por beneficiario.

La medida llegará a los contribuyentes que están obligados a realizar la declaración de la renta, es decir al 96% del total de declarantes. No incluye a aquellos que ganan menos de 12.000 y que no están obligados a declarar, y tampoco a las rentas declaradas superiores a los

60.000 euros. El consejero indicó que el mayor beneficio de las familias no serían esos 25 o 30 euros por contribuyente, sino la cantidad que se dejaría de pagar en la declaración del IRPF si se deflacta la tarifa. En caso contrario, explicó que habrá casos en el que haya contribuyentes que tengan que declarar el año que viene entre 140 y 283 euros más en su tributación sobre renta, siempre referido al tramo autonómico. Son los dos ejemplos que puso del efecto que causaría dicha deflacción para los declarantes que vean incrementados sus ingresos.

Quince deducciones

Luis Alberto Marín comentó que esta medida se suma a la rebaja progresiva autonómica del IRPF que está desarrollando en el período 2019-2023 y que supondrá

decisión de esa trascendencia sin que cuadren las cuentas», indicó. Por ello, señaló que su Ejecutivo está «cuadrando la previsión de ingresos y lo que supone el impuesto de Patrimonio en la Región».

La Cámara de Comercio de Lorca ha mostrado su preocupación por el hecho de que muchos vecinos de la comarca tienen una segunda residencia en Andalucía, que ha suprimido el citado impuesto, y teme la fuga de contribuyentes a Almería para no pagar el tributo que ahora dice el Ejecutivo murciano que está estudiando eliminar.

Crecen las grandes fortunas

José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), explicó que la Comunidad Autónoma recauda actualmente 27.2 millones de euros con este impuesto, que afecta a 4.082 declarantes, sobre un total de 4.454, según los datos disponibles del año 2020. Estos contribuyentes representan el 0.43% de los declarantes de renta en la Región y atesoran una fortuna de 16.212 millones de euros, con una media de 3.6 millones de euros cada uno. Tanto su número como la suma patrimonial es superior a la del año anterior a la pandemia. Entonces hubo 4.359 declarantes con unos bienes totales de 15.431 millones de euros. La Comunidad recaudó menos ese año: 25.4 millones de euros.

Mollinedo destacó que muchos afectados por este gravamen declaran ganar 215.000 euros, lo cual «no se considera normal» para el gran patrimonio del que disponen.

un ahorro en esta legislatura de 54 millones de euros, a los que habría que sumar la deflación aprobada ayer.

Recalcó que ya existen 15 deducciones autonómicas, de las cuales ya se aplican trece, entre las que se encuentran las de gastos de material escolar y de libros; discapacidad; gastos de guardería; conciliación; inversión en vivienda no habitual para menores de 35 años; nacimiento o adopción; inversión en instalaciones de energías renovables; o la deducción por inversión en dispositivos de ahorro de agua.

También incluye las donaciones a investigación biosanitaria, la protección del patrimonio cultural, las actividades culturales y deportivas y el acogimiento de personas mayores de 65 años.

Las ministras Montero y Calviño consideran «irresponsable» el recorte fiscal en la Región

La Asociación de Trabajadores Autónomos califica como «un gran acierto» la rebaja en el impuesto sobre la renta

EP

MADRID / MURCIA. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tachó ayer de «enorme irresponsabilidad» que otra comunidad, en este caso la Región de Murcia, siga la estela de Madrid tras el anuncio esta semana de Andalucía para suprimir el Impuesto sobre Patrimonio. Además, Montero criticó que este «regalo fiscal» se haga en una comunidad que ocupa los últimos puestos de inversión sanitaria o educativa, algo que considera «dura de admitir en un momento de crisis en el que los ciudadanos lo están pasando tan mal».

Asimismo, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, cargó contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que están compitiendo las unas contra las otras para eliminar los impuestos a los ricos, al tiempo que solicitan más fondos al Estado o incluso más recursos europeos. «No es el momento de desmontar el Estado. Es totalmente incongruente e irresponsable», criticó la vicepresidenta primera en una entrevista en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco. Se preguntó si el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está coordinando a su formación o si hay una especie de «carrera destructiva» fiscal a la baja



Nadia Calviño

que ya se ha desencadenado. «Me pregunto si aquí hay alguien al mando». En este sentido, Calviño ve «totalmente incoherente» y de una «enorme irresponsabilidad» que los líderes de las comunidades autónomas de Andalucía y Madrid, regiones que están a la cola en el gasto público sanitario por habitante y a la cola en el gasto por estudiante, bajen los impuestos a los ricos y recorten los servicios públicos. A esto se suma, según Calviño, que la Región de Murcia parece ser que se está uniendo a esta carrera fiscal a la baja, pese a ser «una comunidad autónoma que tiene serios problemas de sostenibilidad fiscal».

Satisfacción de ATA

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Murcia, por otro lado, ha calificado de «gran acierto» la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno de la deflacción del 4.1% del tramo autonómico del IRPF, señaló en un comunicado. «Bajar los impuestos a empresas, autónomos y ciudadanos es siempre una buena noticia», dijo Francisco Casado, presidente de ATA Murcia, quien indicó que esta rebaja fiscal «ayudará a mitigar los efectos de la subida de los precios provocada por la situación económica actual».

Recordó que la Región lidera el número de autónomos en el territorio nacional, con más de 102.464 trabajadores por cuenta propia. Así, la reducción fiscal «supondrá un ahorro para más de 330.000 contribuyentes, de entre 8,5 y 10 millones de euros». Animó al Gobierno central a «seguir este camino de rebajas fiscales».

El gravamen a los ricos afectaría a los mismos 4.000 murcianos que se librarían de pagar Patrimonio

M. B. B.

MURCIA. El Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) estima que el nuevo impuesto a las grandes fortunas que prevé aplicar el Gobierno de la Nación podría afectar a los 4.082 contribuyentes que realizan actualmente declaración del impuesto de Patrimonio en la Región de Murcia, indicó el secretario general de este organismo, José María Mollinedo.

«Si el gravamen, finalmente, se aprueba para los contribuyentes de más de 1 millón de euros de patrimonio neto (sin bienes exen-

tos) afectará a los 4.082 declarantes del impuesto de Patrimonio», precisó Mollinedo. Puntualizó que será así si el Gobierno regional les bonifica el impuesto de Patrimonio a partir de 2023, como tiene previsto hacer. Mollinedo señaló que el impuesto a las grandes fortunas se pagaría en las comunidades que hayan suprimido el tributo de Patrimonio, por lo que considera que no existiría un doble gravamen.

El Gobierno discrepa de sus aliados sobre la duración del impuesto ESPAÑA P22

Endurecen las multas a salones de juego y locales de apuestas

El Gobierno regional aprueba un nuevo régimen de control de establecimientos públicos con sanciones máximas de 300.000 euros

M. B. B.

MURCIA. El Consejo de Gobierno dio el visto bueno, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, al decreto ley de medidas urgentes en materia de régimen sancionador de establecimientos públicos, espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales o extraordinarias en la Región de Murcia. La principal novedad es que se incrementará especialmente el control de los salones de juego y los locales de apuestas, con sanciones más graves que para el resto de establecimientos.

En general, la comisión de una infracción muy grave se sancionará con multa de 30.001 a 300.000 euros; la comisión de una infracción grave, con multa de 1.501 a 30.000 euros; y la comisión de una infracción leve, con multa de 300 a 1.500 euros. Además, podrá imponerse la suspensión temporal de las licencias o autorizaciones o permisos, hasta un año en caso de

infracciones graves y hasta tres años en casos de infracciones muy graves, así como la clausura de locales o establecimientos, hasta un año en caso de infracciones graves y hasta tres años en las muy graves.

El nuevo régimen sancionador actualiza y unifica la normativa en la materia y será de aplicación a los establecimientos, espectáculos y actividades realizados sin título habilitante, que incumplan sus términos, excedan sus límites o quebranten la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad competente, indicó el consejero Marcos Ortuño al término de la reunión del gabinete.

Horarios de apertura y cierre

El decreto ley aprobado incrementa especialmente la intervención y control de los establecimientos públicos dedicados al juego y de los locales de apuestas. Así, se tipifica como infracción grave el incumplimiento de los horarios para la apertura y cierre de los establecimientos de juego y locales específicos de apuestas, considerado por la legislación anterior como infracción leve. Para el resto de establecimientos, la apertura o el cierre fuera del horario establecido o autorizado mantiene la consideración de falta leve.

Se califican como infracciones muy graves, entre otras, la celebración de espectáculos públicos sin título habilitante, incumpliendo sus términos, excediendo los límites de los mismos o quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente, cuando se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas, indica la nota facilitada por la Comunidad.

También son catalogadas como infracciones muy graves dedicar los establecimientos, recintos o instalaciones a actividades distintas de aquellas para las que estuviesen destinados, llevar a cabo un espectáculo o actividad recreativa distinta de la habilitada e incurrir en inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de los datos o documentos que deben acompañar a la correspondiente declaración responsable o solicitud de autorización administrativa previa.

En la misma categoría se sitúa la carencia o falta de vigencia del contrato de seguro de responsabilidad civil y los compromisos que puedan producir alteraciones del orden o crear situaciones de peligro.

2,7 millones de ayuda para proyectos de investigación

El Consejo de Gobierno autorizó a la Fundación Séneca el gasto destinado a la publicación de dos convocatorias de ayudas para financiar proyectos de investigación. Por un lado, dio el visto bueno al gasto de 2.266.827 euros para la convocatoria de ayudas a la realización de proyectos para el desarrollo de investigación científica y técnica por grupos competitivos. Por otro lado, autorizó a la Fundación Séneca el gasto de 500.000 euros para la convocatoria de ayudas a proyectos para la generación de nuevo liderazgo científico 'Jóvenes Líderes en Investigación'. Esta convocatoria está orientada a fortalecer la capacidad investigadora de jóvenes doctores, facilitándoles la oportunidad de adquirir experiencia como líderes independientes de un grupo de investigación.

Diez preguntas y respuestas sobre la ILP del Mar Menor

¿Quién puede denunciar, anula otras leyes, habrá un juzgado especial? Algunos interrogantes de la nueva norma que da derechos a la laguna

MIGUEL
ÁNGEL RUIZ



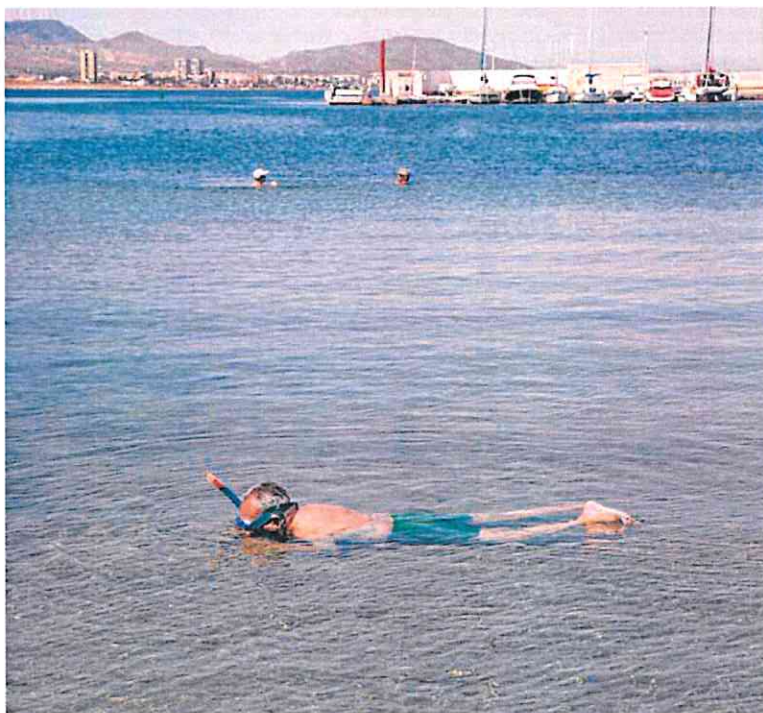
MURCIA. La histórica aprobación en el Senado, el miércoles, de la 'Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor y su cuenca' deja en el aire algunas incógnitas sobre la aplicación práctica de una normativa que no solo es vanguardia jurídica en España, sino también en Europa. El reglamento que desarrollará más adelante sus siete artículos especificará detalles que aún no aclara el texto legal, e incluso se espera que sigan surgiendo dudas sobre cómo actuar jurídicamente ante un espacio natural que a partir de ahora tiene derechos propios, como una persona o una empresa. El abogado ambiental Eduardo Salazar, profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia y miembro del grupo promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), ayuda a LA VERDAD a resolver las diez principales dudas.

1 ¿Cuándo entra en vigor la 'Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor y su cuenca' y quién redacta su reglamento?

—En cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que sucederá en los próximos días o semanas. El reglamento de la ley desarrollará sus siete artículos y aclarará dudas sobre aspectos prácticos de su aplicación. Está previsto que el reglamento sea redactado por los servicios jurídicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el grupo promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) espera que se cuente con su participación en esa fase decisiva. Será promulgado en forma de real decreto por parte del Gobierno central.

2 ¿La ley de personalidad jurídica del Mar Menor prevalece sobre otras normativas legales?

—No. No tiene ni más ni menos jerarquía jurídica que otras leyes, sino que las complementa, aunque no es descartable que sea necesaria la modificación de alguna norma en el caso de que se produzcan contradicciones o solapamientos. Por tratarse de una legislación inédita en Europa, se



Un bañista bucea en la playa de Puerto Bello (Mar Menor). PABLO SÁNCHEZ / AGM

darán situaciones imprevistas que ni siquiera puede anticipar el reglamento.

3 ¿Quién puede poner denuncias o emprender acciones de defensa del Mar Menor al amparo de la nueva ley?

—Cualquier persona física o jurídica. La novedad de la ley es que las denuncias se presentan en nombre del Mar Menor —o sea, el espacio natural es la parte interesada— y quien la interpone recupera todos los costes del litigio —abogados, procuradores, peritos, testigos...— y está eximido de las costas judiciales.

4 Las denuncias, ¿hay que ponerlas en un juzgado o instancia judicial determinada?

—No. La ley de personalidad jurídica no supone la creación de una nueva instancia judicial. Las acciones se plantean ante los juzgados ordinarios —contenciosos, civiles y penales—, como cualquier otra denuncia.

5 ¿Se resolverán ahora más rápido las acciones legales en defensa del Mar Menor?

—No tiene por qué. Depende de los medios materiales y humanos de la Administración de Justicia, que tiene sus propios tiempos. La nueva ley es nada más —y nada menos— que una herramienta al servicio de los ciudadanos para que defiendan el Mar Menor.

6 ¿Cómo se elegirá a los miembros del Comité de Representantes, Comisión de Seguimiento y Comité Científico —salvo en el caso de los designados por las administraciones—?

—El reglamento debe dar respuesta a esta cuestión para evitar suspicacias. En el caso del Comité de Representantes, está previsto que formen parte de él siete integrantes del grupo promotor de la ILP, que está formado por ocho personas —Teresa Vicente Giménez, Eduardo Salazar Ortuño, Teresa Conesa Conesa, Ada García Saura, María José Campillo Meseguer, María Rocío García Martínez, Alfonso Manzano Ruiz y Pedro Ma-

canás Valverde—. Una de ellas se quedará fuera. En la Comisión de Seguimiento, los sectores económicos, sociales y ecologistas tendrán que ponerse de acuerdo entre ellos para elegir a sus delegados, aunque no está estipulado el método, solo que este proceso será convocado y supervisado por el grupo promotor. Y en cuanto al Comité Científico, se espera que esté formado por investigadores locales, nacionales e internacionales. El plazo de pertenencia a los tres órganos de representación de la laguna es de cuatro años, con posibilidad de prórroga, y ninguno de sus integrantes cobrará por su trabajo.

7 ¿Los representantes legales del Mar Menor tendrán un lugar donde reunirse?

—La ley no hace referencia alguna a una sede física, aunque el Ayuntamiento de Los Alcázares se ha ofrecido a albergar una oficina permanente.

8 ¿Cómo se articulará legalmente la intervención de los tutores del Mar Menor en los procesos judiciales?

—La idea inicial fue que la tutoría fuera una parte interesada en todos los procedimientos, en condición de codemandantes, pero esa posibilidad se desechó. El reglamento aclarará este punto, pero pueden producirse tensiones

Un ejemplo para los ríos Ródano y Loira

En su consideración legal de sujeto de derechos, el Mar Menor ha seguido los pasos de masas de agua como los ríos Atrato (Colombia) y Whanganui (Nueva Zelanda). Aunque el grupo promotor de la ILP, paradójicamente, se inspiró en la declaración de personalidad jurídica preparada para el lago Erie, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá y también con problemas de eutrofización, que finalmente no salió adelante por el rechazo del gobernador del Estado de Ohio. Organizaciones conservacionistas y juristas ambientales de toda Europa se fijan ahora en el Mar Menor para defender la asignación de derechos a otros espacios naturales del Viejo Continente. Ya hay proyectos legales en curso para los ríos Ródano (de donde se aspiraba a trasvasar agua hacia la Región de Murcia) y Loira, en Francia. También se quiere procurar esta protección al Mar del Norte, en Países Bajos, y al entorno de la ciudad norirlandesa de Derry.

nes entre el Comité de Representantes y la Comisión de Seguimiento —guardianes y guardiánas según la ley—, sobre el papel un órgano menos decisivo.

9 ¿Cómo se resolverán las diferencias entre el Comité de Representantes y la Comisión de Seguimiento?

—Otra cuestión que debe aclarar el reglamento. De acuerdo con el espíritu de la ley, los guardianes y guardiánas son la voz del Mar Menor y tienen plena capacidad jurídica para plantear iniciativas y presentar denuncias. Puesto que se sentarán junto a representantes de los ayuntamientos ribereños y de la cuenca vertiente, se espera que los conflictos se solucionen internamente.

10 ¿La nueva ley puede dar, mediante la acción de sus órganos de representación, proyectos o actividades económicas perjudiciales para el ecosistema?

—No. Solo la administración o el poder judicial tienen potestad para detener obras o industrias que se consideren dañinas o contaminantes. La ley simplemente facilita herramientas para que se inicie la acción judicial.

📍 'Los pies en la tierra', el blog del medio ambiente: laverdad.es/lospiesenlatierra

Casi la mitad de los puestos de trabajo quedarán obsoletos en 2025

Un estudio pone de manifiesto que las empresas regionales se implican más en la innovación y menos en la experiencia del cliente

DANIEL VIDAL

MURCIA. El 45% de los puestos de trabajo quedarán obsoletos en tres años y el 72% de los directivos consideran que el cambio y la adaptación de las empresas al actual entorno de volatilidad e incertidumbre debe venir desde dentro y con la adaptación de habilidades, funciones, procesos, etcétera. Estos datos suponen un «punto de partida» para el estudio realizado por el Observatorio Cegos, que pretende «analizar cómo está reaccionando el tejido empresarial de la Región de Murcia a los cambios del entorno, así como recoger las tendencias y mejores prácticas para impulsar ese tejido».

El estudio, titulado 'Región de Murcia reacciona' y elaborado por la Asociación Dirección Humana y el Grupo Cegos, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Murcia, arroja entre sus principales conclusiones que el nivel de cumplimiento medio de gestión de las nuevas realidades por parte de las empresas de la Región es del 39%. Además, «las organizaciones responden con niveles similares de gestión ante las nuevas realidades que condicionan el futuro, como las nuevas tecnologías, los nuevos valores de los trabajadores y las nuevas oportunidades de negocio». Pese a todo y según el mismo estudio, hay brechas notables entre distintas funciones de las estructuras orgánicas de las em-

presas. Por ejemplo, los departamentos de Dirección de Operaciones son los que mejor están gestionando los retos futuros (44%), mientras los de Recursos Humanos son los que tienen un mayor margen de mejora, al puntuar el estudio su nivel de gestión de esos retos en un 38%.

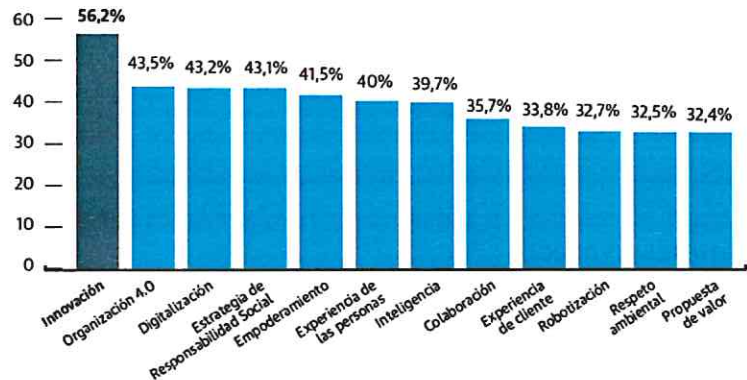
Los doce retos

El informe presentado ayer, basado en los datos facilitados por más de 200 empresas y entidades de la Región, recoge los doce retos del futuro que las organizaciones deben considerar para su evolución. Esos doce retos son «digitalización, colaboración, experiencia del cliente, organización 4.0, respeto medioambiental, innovación, robotización, empoderamiento, experiencia de los trabajadores, inteligencia, estrategia de responsabilidad social y propuesta de valor».

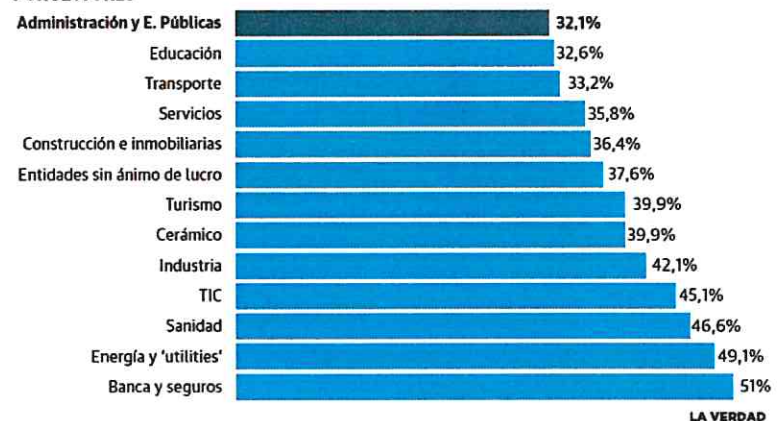
En este sentido y según concluye el estudio, las estrategias de innovación, organización 4.0, digitalización o responsabilidad social corporativa son los retos del futuro que presentan mayores niveles de gestión en las empresas de la Región de Murcia. Sin embargo, aún queda recorrido en el desarrollo de la experiencia del cliente, las nuevas tecnologías, el desempeño ambiental o el desarrollo de propuesta de valor, que son los retos del futuro «que presentan menores niveles de gestión en la Región de Murcia», según el estudio.

Por otra parte, las Administraciones Públicas son las que presentan un menor nivel de gestión global de estos retos (poco más del 32%), seguidas de las empresas de educación y transporte. En el otro extremo de la tabla, se encuentran los sectores de banca y

Nivel de gestión de los retos en las empresas



POR SECTORES



LA VERDAD

seguros, energía y sanidad, que ocupan los tres primeros puestos por nivel de gestión.

La jornada estuvo presidida por la directora general del Servicio de Empleo y Formación, Marisa López Aragón, quien abundó en la idea de que el otoño se presenta «complicado». López Aragón estuvo acompañada por Pepa Jiménez, presidenta de la Asociación Dirección Humana; José Daniel Martín, secretario general de la Cámara de Comercio de Murcia, y Juan José Aguilar, director de Mercado y responsable de Comunicación de Cegos España.

Pendientes del entorno 'Vuca-Bani'

Los participantes en la presentación del estudio coincidieron ayer en prestar especial atención al llamado entorno 'Vuca-Bani'. Pero, ¿qué significa? El término 'Vuca' surgió en Estados Unidos a finales de los años 80 para describir el nuevo mundo en torno a cuatro dimensiones: volátil, incierto -uncertain, en

inglés-, complejo y ambiguo. Justo el entorno en el que se mueven ahora mismo las empresas, explicaron ayer los responsables del estudio. A esto hay que añadirle el acrónimo 'Bani', cuyas siglas hacen referencia, por sus términos en inglés, a lo frágil o quebradizo ('brittle'), la ansiedad, lo no lineal y lo incomprensible. «El entorno 'Vuca-Bani' exige una nueva forma de actuar», dejó claro Pepa Jiménez, de la Asociación Dirección Humana.

La Región lidera en julio el crecimiento del negocio del sector industrial

LA VERDAD

MURCIA. La cifra de negocios de la industria aumentó un 49,4% en julio en la Región de Murcia en comparación con el mismo mes de 2021, hasta alcanzar un índice de 221,2, según los datos

difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, la Región de Murcia fue en julio la comunidad que registró un mayor crecimiento en la facturación de la industria de un índice que aumentó en todas las autonomías, superior a la media nacional, que fue del 19,9%.

En el ámbito nacional, la cifra de negocios de la industria subió en julio respecto al mismo mes de 2021, debido principalmente al impulso de las ventas procedentes del sector energético.

Croem apoya la reelección de Garamendi al frente de CEOE

LA VERDAD

MURCIA. La Comisión Ejecutiva y la Junta Directiva de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), reunidas ayer, mostraron su respaldo a la candidatura de Antonio Garamendi, que ha anunciado su intención de es-

tar al frente de CEOE cuatro años más. Garamendi recibió también el apoyo de los órganos directivos de la confederación nacional esta misma semana y los miembros de la Ejecutiva y de la Directiva de Croem hicieron lo propio en la primera reunión del curso. Por otra parte, el presidente de Croem, José María Albarracín,

analizó frente a los órganos directivos la situación actual en materia económica y laboral y habló de las prioridades de la patronal para este curso, que pasan por promulgar una nueva ley dedicada a la simplificación administrativa, reducir la fiscalidad y seguir avanzando en la mejora de las infraestructuras, entre otros temas. Además, Albarracín habló de la celebración de la tercera edición del CEO Congress, que el 16 de noviembre contará con las principales presidentes de compañías nacionales e internacionales.

La multinacional estadounidense Corteva Agriscience adquiere la murciana Symborg

La sede seguirá en la Región y la compañía conservará su estructura y actual equipo, con cambios en la dirección

LA VERDAD

MURCIA. La multinacional estadounidense Corteva Agriscience adquiere Symborg, compañía experta en productos biológicos para la agricultura con sede en Murcia.

El vicepresidente ejecutivo de la Unidad de Negocio de Protección de Cultivos de Corteva Agriscience, Robert King, explicó en un comunicado que «esta maniobra es un paso importante en la estrategia de Corteva para acelerar el desarrollo de una cartera de productos biológicos de primera clase, como parte de las soluciones integradas que ofrecemos a nuestros clientes».

En este sentido, destacó que en los últimos tres años Corteva «ha establecido acuerdos de licencia y distribución con las principales empresas de productos biológicos, seleccionadas tras evaluar las tecnologías y demostrar la aceptación de los clientes. Esta adquisición muestra la progresión de Corteva para seguir estableciéndose como líder tecnológico en este segmento de rápido crecimiento».

Por su parte, el socio fundador y CEO de Symborg, Jesús Juárez, comentó que «la integración con Corteva se convierte en una oportunidad para reforzar nuestro impacto en el campo, ayudando a los agricultores a afrontar los retos actuales y futuros. Y, más allá, una

oportunidad para dar respuesta a una sociedad que demanda alimentos seguros y sostenibles. Symborg y Corteva comparten valores y visión de mercado, convirtiéndose en una gran unión para diseñar el futuro de la agricultura».

Talento para el I+D regional

Juárez confirmó que Symborg continuará en Murcia, «aportando al I+D regional y potenciando desde aquí todos los proyectos que tenemos en marcha. Continuaremos desarrollando soluciones innovadoras en nuestra sede de Murcia con el talento de nuestro equipo de siempre. No nos vamos, sino que traemos inversión y reforzamos el proyecto. Es una gran oportunidad de crecimiento para todos».

No obstante, según ha podido saber LA VERDAD, una vez se cierre la adquisición, tanto Jesús Juárez como Félix Fernández, socios fundadores de Symborg, dejarán paso a una nueva dirección de la mano de Corteva Agriscience.

Cabe destacar que la factura-

Al cierre del año fiscal, la empresa murciana de tecnologías microbiológicas facturó 41 millones de euros

Según ha podido saber LA VERDAD, una vez se cierre la adquisición, los fundadores dejarán paso a una nueva gerencia

ción de Symborg al cierre del presente año fiscal (del 1 septiembre 2021 al 31 agosto de 2022) es de 41 millones de euros.

Corteva colaboró por primera vez con Symborg para ampliar y llevar a los agricultores un innovador bioestimulante de origen natural que permite a las plantas fijar el nitrógeno del aire y ponerlo a disposición de la planta, proporcionando una fuente de nitrógeno alternativa y suplementaria y reduciendo

potencialmente la emisión de gases de efecto invernadero por el uso de fertilizantes.

Esta operación, por su parte, continúa con el compromiso de Corteva de construir una cartera más diferenciada y sosteniblemente ventajosa que proporcione soluciones rentables para los agricultores. Desde Corteva, aseguran que la empresa aprovechará las sinergias entre organizaciones para ampliar las soluciones actuales de Symborg,

así como los nuevos productos en desarrollo. La adquisición de Symborg por capital extranjero vuelve a demostrar el gran interés que existe más allá de nuestras fronteras por las joyas del tejido empresarial regional. En los últimos meses hasta cuatro compañías del sector de transportes, en el que la Región es puntera a escala internacional, han sido compradas total o parcialmente por sociedades foráneas.

A principios de agosto, ESP Solutions dio entrada en su capital a los fondos de inversión Avior y Blantyre Capital. Con anterioridad, la estadounidense Linneage Logistics adquirió el Grupo Fuentes, Logista compró el 60% de Transportes El Mosca y el fondo estadounidense Apollo se hizo con el 49% de Primafrio.



Olga García, Lorcá Planes y Planes, ayer, en la presentación de la tarjeta solidaria. NACHO GARCÍA / AGM

CaixaBank y Cáritas lanzan la primera tarjeta solidaria

La herramienta permitirá a los murcianos donar a los más vulnerables el 0,7% del coste total de sus compras

YOLANDA SALMERÓN

MURCIA. Hacer de la solidaridad una experiencia común gracias a un instrumento cotidiano para que, de manera natural y sin esfuerzo, ayudar se convierta en una forma de vida. Esa es la finalidad de la primera tarjeta solidaria en España, lanzada por CaixaBank y Cáritas Diócesis de Cartagena.

Esta herramienta permite a murcianos, empresas y entidades realizar donaciones destinadas a colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social de forma sencilla y cómoda, a través de cualquier tipo de compra, como un viaje o una cena.

En concreto, del coste total de la compra, los usuarios de la tarjeta solidaria donarán a Cáritas un 0,7%, que podrán desgravar en la renta.

Durante la presentación de la tarjeta, el director de Cáritas Diócesis de Cartagena, José Antonio Planes, que estuvo acompañado por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorcá Planes, y la directora territorial de CaixaBank en la Región de Murcia, Olga García, explicó que esta iniciativa es una de las tantas que están llevando a cabo para «erradicar la pobreza, que es una injusticia estructural». Asimismo, advirtió del déficit de alimentos que sufren para cubrir las necesidades nutricionales de quienes más lo necesitan. Es por ello que Planes apeló a «la responsabilidad social de los murcianos para que continúen colaborando con Cá-

ritas y, sobre todo, que no miren para otro lado».

Sin gastos de expedición

En este sentido, el obispo alabó «la generosidad de los murcianos, que llevan en su ADN la solidaridad», y recordó, asimismo, que «Cáritas la conforman todas aquellas personas que sienten que deben ayudar porque tienen un corazón que ve y escucha las dificultades».

Para solicitar la tarjeta se puede hacer directamente a través de la web 'tarjetasolidaria.org', o en las oficinas de CaixaBank. Según la directora territorial de la entidad en la Región, Olga García, «para facilitar la adhesión de usuarios, la tarjeta solidaria no tiene coste de expedición ni de mantenimiento y tampoco obliga a cambiar de banco, en caso de que el usuario no disponga de cuenta en éste».

CC OO pide una subida salarial y retomar la negociación colectiva

LA VERDAD

MURCIA. CC OO en la Región de Murcia pide «una subida de los salarios y del salario mínimo interprofesional, medidas que se deben aplicar a las administraciones públicas incrementando también las tasas de reposición y las ratios de plantilla», según apunta su secretario general en un comunicado, Santiago Navarro.

Desde la organización sindical consideran que los bajos salarios afectan especialmente a la economía de las familias en la Región debido a la alta inflación, así como a la paralización y estancamiento de la negociación colectiva. CC OO

lamentaba que «la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora tendrá un impacto social y económico que puede provocar una devaluación de los salarios similar a la de anteriores crisis, lo que redundaría en el consumo interno y, por tanto, en un estancamiento de la economía».

En cuanto a la negociación colectiva, el sindicato señala que ya hay movilizaciones porque «no hay avances. En la Región es un problema que se arrastra desde hace tiempo y tiene que ver con una estrategia empresarial que facilitó la reforma laboral del 2012 con la pérdida de ultraactividad de los convenios», indicó Navarro.

Tres de cada diez hipertensos con Covid requieren de ingreso hospitalario

LA VERDAD

MURCIA. El 29% de los hipertensos que se infectaron de Covid requirieron de ingreso hospitalario, según un estudio nacional coordinado por José Abellán, director de la Cátedra de Riesgo Cardiovascular de la UCAM. La investigación, en la que han participado diez sociedades científicas autonómicas y 120 profesionales, será presentada en la 27 Reunión de la Sociedad Española de Hipertensión, que se inauguró ayer en el Auditorio Víctor Villegas y que cuenta con el apoyo institucional de la UCAM.

El trabajo, en el que han participado 1.400 pacientes hipertensos con Covid-19, muestra que el 29% de ellos requirieron de ingreso hospitalario, y un 5% precisó de asistencia en UCI, siendo la mortalidad por Covid entre estas personas del 4%, datos superiores a la media sin esta patología.

Además, el estudio recoge en las conclusiones que la presencia de más patologías —como diabetes— o el tabaquismo empeora el pronóstico, y señala que el tratamiento con bloqueantes del sistema renina angiotensina se muestra como protector.

En la Reunión también participan, por parte de la UCAM, Pablo Barcina, director de la clínica de Nutrición; María José López, vicedecana del Grado en Enfermería; la investigadora Silvia Montoro y el equipo de Simulación Clínica, que imparte un taller sobre Soporte Vital Inmediato.

Reclaman elecciones en Enfermería tras cuatro años de junta provisional

El Colegio y el Consejo General aseguran que se convocará a las urnas en «un breve plazo»

JAVIER PÉREZ PARRA

MURCIA. El Colegio de Enfermería está a punto de cumplir cuatro años con una junta de edad al frente, un órgano de gobierno provisional cuya principal función era preparar a la institución para la convocatoria de elecciones. Ante esta situación, un grupo de colegiados, organizados a través de una plataforma, se ha lanzado a las redes sociales para exigir que las enfermeras de la Región sean llamadas a las urnas. «Tenemos una junta, impuesta en su día por el Consejo General de Enfermería, que no ha sido votada por nadie, y cuya única misión era convocar elecciones. Pero ni lo hacen ni rinden cuentas», denuncia Sandra Navarro, presidenta de esta plataforma.

La junta de edad se puso al frente del Colegio en otoño de 2018, después de una larga batalla judicial con la anterior presidenta, Amelia Corominas, quien fue destituida por el Consejo General bajo la acusación de haber convocado elecciones sin la publicidad necesaria. Desde entonces, esta junta provisional ha defendido que su intención es llevar a cabo unas elecciones que normalicen la situación, pero lo cierto es que, cuatro años después, todavía no lo ha hecho.

«Estamos empezando a mover todo el proceso; vamos a cumplir reglamentariamente con la norma estatutaria y convocaremos una asamblea [previa], porque es lo ético y lo correcto», asegura Eduardo Estrella, secretario de la junta de



Un grupo de enfermeras protesta frente a la sede del Colegio, en Murcia, el pasado mayo. NACHO GARCÍA / AGM

edad. «De lo que se trata es de que haya la mayor transparencia y difusión, para conseguir la mayor participación posible», subraya. El calendario, no obstante, no se concreta. «La fecha la fijará la junta, en una reunión convocada para ese fin», explica Estrella.

«Una compleja situación»

Por su parte, el Consejo General de Enfermería señala que la junta de edad «nos han trasladado que ha llevado mucho tiempo analizar y resolver la compleja situación jurídica-administrativa del Colegio, pero parece que las enfermeras de Murcia pronto van a elegir a sus representantes, en un momento en que la profesión atraviesa momentos delicados». El máximo órgano colegial de España añade que «la junta de edad

trabaja en la organización de unas elecciones que se van a celebrar en un plazo breve», y muestra su deseo de que «el Colegio de Murcia recupere la normalidad lo antes posible».

Pero las explicaciones dadas hasta el momento no convencen al Defensor del Pueblo, que recientemente instó al Colegio a facilitar «información ampliada». Los estatutos de la organización colegial establecen «una obligación de ordenar la convocatoria de elección

nes de manera inmediata» por parte de la junta de edad, recordó el Defensor en su escrito.

El Colegio arrastra años de enfrentamientos. Hasta 2011, estuvo bajo el mando de Diego Gutiérrez, quien acaba de ser condenado a dos años de prisión por un delito de apropiación indebida. Los hechos fueron denunciados por Amelia Corominas, quien ganó las elecciones convocadas tras el cese de Gutiérrez. Pero Corominas mantuvo un duro enfrentamiento con el Consejo General, a cuyos dirigentes acusó de corrupción, y el Consejo terminó destituyéndola en 2016. Sin embargo, ella se mantuvo en el cargo hasta 2018, con la presentación de numerosos recursos. Ahora, Corominas se enfrenta a un juicio por un presunto delito de desobediencia.

«Tenemos al frente de la institución a unas personas a las que no ha votado nadie», denuncian los profesionales críticos

La oposición pide más medidas contra la ludopatía entre menores

El 23% de los estudiantes acuden «de manera habitual a salones de juego», según una encuesta del IES José Planes

EP

MURCIA. Un 23% de los menores reconocen acudir de manera habitual a salones de juegos. Así lo recoge una encuesta elaborada por el IES José Planes de Espinardo, según explicó ayer la profesora Mercedes Escavy, coordi-

nadora del proyecto ADICT-Lescentes, durante su comparecencia en la comisión especial para la Infancia y la Adolescencia de la Asamblea Regional.

La docente advirtió de que la Región «triplica la media del resto de España» en casas de apuestas; la Comunidad dispone de un establecimiento de apuestas por cada 4.000 habitantes, y no tienen regulación de horario.

Entre los datos de la encuesta, figura que un «23% de los menores entraba en casas de apuestas de forma habitual, un 20% lo hacía en grupo, con amigos. Se ha

convertido en una práctica social, en un lugar de encuentro donde se reúnen a celebrar cumpleaños», lamentó Escavy.

Asimismo, incidió en que la facilidad para entrar en las casas de apuestas es el factor que más influye a los jóvenes a la hora de jugar. «Un 43% afirmaba conocer a niños en riesgo de caer en la ludopatía, un 40% aseguraba que no se pide de forma regular el DNI, y el 8% decía que se permite fumar», detalló.

En su opinión, el problema del juego «se ha blanqueado desde la Administración». En unos años, «la

realidad de la ludopatía nos va a golpear muy seriamente», denunció. Los centros escolares podrían formar parte de la solución al intervenir de manera temprana, pero «se ha potenciado un sistema evaluador que ha favorecido la competitividad y ha olvidado el desarrollo de la conciencia de grupo y esto hace a nuestros jóvenes más manipulables y presas de prácticas como la del juego», reflexionó.

Problemas de salud pública

Desde los grupos parlamentarios, la portavoz de Podemos, María Marín, criticó al Gobierno regional por no adoptar medidas al respecto para «evitar que los jóvenes se vean sin más alternativa de ocio que la que proporcionan las casas de apuestas».

El portavoz de Cs, Francisco Álvarez, señaló que la ludopatía «no puede combatirse solo con

la prohibición de estas prácticas, como nos ha demostrado la historia» y apostó por «el control en los locales de juego para proteger a los más vulnerables». Por su parte, el diputado de Vox Francisco José Carrera añadió que este problema «no es solo regional, sino también nacional».

La socialista Lara Hernández advirtió de que es un «problema de salud pública» que afecta «especialmente a la Región». En este sentido, la diputada denunció que así «no se está haciendo todo lo posible. Es una barbaridad que el juego se esté blanqueando desde la Administración regional».

Desde el PP, la diputada Maruja Pelágrin indicó que «hay que seguir trabajando» y defendió que «la Región ha apostado por medidas de seguridad y por un juego seguro y la prohibición absoluta a menores de 18 años».



Obreros trabajan en la planta de biocombustibles del Repsol, en Escambreras. J. M. RODRÍGUEZ / AGM

El electrolizador será el corazón de la factoría y el que, mediante un proceso químico, producirá el combustible

vés de la construcción de una gran electrolizador, que será el corazón de la factoría.

Dicho aparato permite producir hidrógeno mediante un proceso químico (electrólisis) capaz de separar las moléculas de hidrógeno y oxígeno de las que se compone el agua usando electricidad. El hidrógeno producido de esta forma sostenible, es decir, sin emitir dióxido de carbono a la atmósfera, puede ser la base de una economía descarbonizada.

Repsol, que es el primer productor y consumidor de esta energía de España, y que opera en Cartagena la mayor planta de hidrógeno de Europa, cuenta con una hoja de ruta para avanzar hacia el objetivo fijado en su Plan Estratégico de alcanzar los 552 megavatios de capacidad instalada en 2025 y 1,9 gigavatios en 2030.

Consortios regionales

La compañía está ya desplegando multitud de proyectos en toda la cadena de valor del hidrógeno renovable e impulsa la creación de grandes consorcios regionales para promover proyectos industriales, como el Corredor Vasco del Hidrógeno, el Valle del Hidrógeno de Cataluña, el clúster del Hidrógeno en Castilla-La Mancha y el Polo del Hidrógeno Renovable en torno al Valle de Escambreras. El pasado 20 de septiembre, Repsol anunció que en 2022 pondrá en marcha en Petronor su primer electrolizador, de 2,5 megavatios de capacidad.

En 2024 está prevista la puesta en funcionamiento de un electrolizador de 10 megavatios, en las inmediaciones de Petronor, en Bilbao, que dará servicio a la planta de combustibles sintéticos que construirá junto con Saudi Aramco. Además, prevé la construcción de otros electrolizadores como el de Cartagena en la capital vizcaína.

Repsol asigna 200 millones a su planta de hidrógeno y creará 1.100 empleos

La empresa ya trabaja en el diseño de los equipos y en los permisos, aunque la construcción empezará cuando inaugure la fábrica de biocombustibles

ANTONIO LÓPEZ

CARTAGENA. La firme apuesta de la multinacional Repsol por el Valle de Escambreras ha quedado de manifiesto otra vez con la próxima construcción de una planta de hidrógeno renovable, anunciada

anteayer por la empresa, en la que invertirá más de 200 millones de euros. Esta nueva inversión, que llegará después de la puesta en marcha de su fábrica de biocombustibles de última generación a base de aceites de cocina, supondrá poner la máxima potencia en su idea de convertir sus complejos industriales en polos multienergéticos capaces de producir productos con baja, nula e incluso negativa huella de carbono. La iniciativa será financiada con fondos de la Comisión Europea.

Aunque aún no hay fecha de

inicio de las obras, la petrolera prevé generar 1.100 puestos de trabajo en la fase de construcción. Una vez que esté en marcha tendrá una capacidad de 100 megavatios y se estima que evitará la emisión a la atmósfera de más de 167.000 toneladas anuales de dióxido de carbono.

Repsol trabaja desde hace años en este proyecto. Tras una primera fase para estudiar la viabilidad, ha pasado una segunda, llamada de ingeniería conceptual, orientada a la planificación y prediseño de la instalación.

En la actualidad, el proyecto para generar hidrógeno se encuentra en la fase de ingeniería básica. En esta se diseñan ya los equipos, líneas eléctrica y otras instalaciones. De forma paralela, en colaboración con las instituciones públicas, se trabaja en la tramitación administrativa del proyecto, según las fuentes consultadas en la compañía. Se trata de los pasos previos al proceso de diseño de detalle, adquisición de equipos y la construcción. Para la producción de este compuesto se usará el método de la electrólisis, a tra-

Los vecinos de la zona norte dan a Vélez un ultimátum para que aumente la vigilancia

A. L.

CARTAGENA. El hartazgo de los vecinos de las diputaciones ante la inseguridad que viven los pueblos de la zona norte del municipio ha tenido como resultado el ultimátum que la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena ha dado al delegado del Gobierno, José Vélez, para que reaccione. Tras varios escritos pidiéndole una reunión en busca de soluciones a la oleada de robos, la última en La Aljorra, Miranda y Las Lomas del Albuji, y exigiéndole más Guardia

Civil, la presidenta del colectivo, Sonia Montoya, avisó ayer de que convocará una manifestación si Vélez no mueve ficha pronto.

«No paramos de preguntarnos cuántos robos y actos vandálicos hacen falta para que se tomen cartas en el asunto», consideró Montoya. Las asociaciones vecinales no escatiman en críticas para el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno, pero es a esta última institución a la que ponen en tela de juicio: por su «inacción» se sienten «abandonados».

Y es que «nos hemos reunido con quien ha tenido la delicadeza

de recibirnos. El delegado del Gobierno no es uno de ellos. Pero es que en años anteriores, en las reuniones que mantuvimos, creímos en lo que se nos decía: que iban a aumentar los efectivos y que iba a haber mayor colaboración entre los tres cuerpos de seguridad, pero nada de lo prometido se ha cumplido y así vamos para atrás».

Es por ello por lo que Montoya está dispuesta a salir a la calle a si Vélez no recibe a su directiva. No entiende por qué moviliza gran número de efectivos con visitas de altos cargos y políticos, «pero cuando los necesitan los vecinos

no aparece ni uno», recriminó la presidenta de la Federación. «Solo queremos que se nos escuche y que se vea el interés de nuestros gobernantes por solucionar nuestros problemas, porque los vecinos que sufren estos robos y actos vandálicos sienten pavor ante la posibilidad de que vuelva a ocurrir y quieren defender lo que es suyo».

Alarma social

Fuentes de la Delegación aseguran que aún no se han reunido «por cuestiones de agenda». En cualquier caso, añaden, «los vecinos no pueden sentirse abandonados porque siempre que se ha generado alarma social, el delegado ha pedido a la Guardia Civil que incrementara la vigilancia, como hizo recientemente».

Los últimos robos en La Aljo-

rra, Miranda y Las Lomas han colmado el vaso. En las últimas dos semanas, los delincuentes asaltaron media docena de viviendas y naves industriales, y se llevaron dinero, joyas, dos ordenadores, una videoconsola y maquinaria. La peor situación la viven en La Aljorra, donde los vecinos patrullan las calles desde hace tres semanas. Su iniciativa evitó el atraco de una vivienda y ha disuadido a los ladrones. El presidente de la asociación vecinal, Francisco Cavas, pidió ayer de nuevo un destacamento de la Policía Local. Agradece los controles que realizan los agentes municipales y que tengan hilo directo para avisarles en caso de emergencia, pero exigen que este servicio no se elimine cuando pase cierto tiempo, como ocurrió en años anteriores.

El Ejecutivo asume una rebaja en su previsión de crecimiento para 2023

La Moncloa se afianza en el mensaje de que la economía avanzará «en torno a un 2%», siete décimas menos que lo que estimaba en julio

CLARA ALBA

MADRID. El Gobierno empieza a prepararse para una posible rebaja de sus previsiones macroeconómicas. Y lo hace en un momento en el que los principales bancos centrales han dejado claro que la lucha contra la inflación es el objetivo a batir, aunque eso implique dañar la recuperación.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aludió ayer a que la economía española crecerá «en torno a un 2%» el próximo año. La cifra implicaría un recorte de siete décimas desde el 2,7% del último cuadro macroeconómico que se presentó en julio, y que ya supuso un descenso de ocho décimas respecto a la estimación anterior.

Fuentes del Ministerio de Economía matizan que las palabras de Montero no implican cambios respecto a las estimaciones que mantiene la vicepresidenta Nadia Calvino, que suele referirse a las previsiones de las firmas internacionales al aplicar para 2023 ese «en torno al 2%». Pero el Ejecutivo también lleva semanas apuntando que para 2022 el crecimiento rondará el 4%, de nuevo ligeramente por debajo del 4,3% establecido en el cuadro macro. Es decir, hay dudas sobre el cumplimiento de los objetivos.

Las distintas instituciones, desde el Banco de España hasta la Comisión Europea, pasando por organismos como el FMI, llevan tiempo advirtiendo de la dificultad de realizar previsiones, ante la incertidumbre por la evolución de la guerra en Ucrania y el impacto de la retirada de estímulos de los bancos centrales.

En este entorno, los indicadores que se utilizan para estimar



La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. E. PARRA / EP

CEOE: «Marcar precios es una programación soviética»

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, volvió a cargar ayer contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por su propuesta de tratar de topor los precios de los alimentos básicos y fue un paso más allá al acusarla de promover un cártel. «Parece mentira

que un miembro del Gobierno promueva un cártel», se lamentó Garamendi en la clausura del congreso anual de Anged, la patronal de la gran distribución. «Es increíble que en un país moderno y de Europa hace pocos días se hablara de que los precios los marque el Estado, es una programación soviética», recalcó el dirigente de la patronal un día después de hacer oficial su candidatura a la reelección al frente de la CEOE.

cuánto y cómo crecerán las economías son medidas al milímetro y casi hora a hora. Así que, para conocer si finalmente se recortan las previsiones de creci-

miento, habrá que esperar a la nueva actualización del cuadro macro que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno debería presen-

tar la próxima semana. Fuentes del Ejecutivo indican que será complicado cumplir con el plazo constitucional para ello, con lo que la propuesta para elaborar la nueva hoja de ruta de ingresos y gastos se conocerá más bien en octubre, como ha ocurrido otros años en los que, después, los Presupuestos sí se han aprobado antes de terminar el ejercicio, para que entren en vigor el uno de enero del siguiente.

Aunque desde el Gobierno defienden que la economía española seguirá creciendo a un ritmo robusto, lo cierto es que esas nuevas previsiones tendrán que incorporar algunos acontecimientos ocurridos desde julio, como la mayor agresividad de los bancos centrales o los riesgos energé-

ticos y los problemas de suministro de gas ruso. Pese a ello, Montero descartó este jueves que la economía esté abocada a la contracción. «No hay ningún dato que nos permita aventurar que se vaya a producir una recesión económica», indicó.

De hecho, si el PIB crece en tasas del 4% este año como se prevé, la cifra «cuadruplicaría la media de la OCDE y estaría por encima de países como Italia, Alemania o Francia», insistió la ministra de Hacienda.

Los mercados desconfían

Es cierto que la perspectiva para España es mejor que para otras economías como la alemana, mucho más dependiente del gas ruso. Sin embargo, los problemas de sus socios europeos pueden acabar pasando factura a la recuperación nacional. Y el mercado lleva semanas escuchando de cerca los tambores de recesión global, sobre todo tras el acelerón en las subidas de los tipos de interés por parte de los principales bancos centrales.

La Fed estadounidense, que el miércoles subió tipos en otros 75 puntos básicos, o el Banco Central Europeo (BCE), ya han asumido que la lucha contra la inflación pasa inevitablemente por dañar la economía. También el Banco de Inglaterra elevó ayer su tasa en 50 puntos básicos, igual que Noruega. Y Suiza lo hizo en 75 puntos. Un escenario que asusta a los inversores y que se refleja en el fuerte repunte experimentado por la rentabilidad de los bonos, que actúa como un indicador de lo que los Estados deben pagar para «colocar» su deuda. En España, el interés del bono a 10 años supera de nuevo el 3%.

Pero el caso más llamativo es el de EE UU, donde se alcanza el 3,55%, máximo de 2011. El problema es que en los plazos más cortos el repunte es superior, con el interés del bono a dos años por encima del 4%. Es la primera vez que ocurre desde finales de 2007, en pleno inicio de la anterior crisis financiera mundial. Y se está produciendo la denominada inversión de la curva (cuando la rentabilidad de los títulos a corto plazo supera la de los bonos a 10 años), lo que históricamente está asociado a una recesión en los próximos 12 a 18 meses.

La brecha entre el precio de la gasolina y el del gasóleo se amplía a 16 céntimos

C. A.

MADRID. El precio de los carburantes vuelve a dar esta semana un ligero respiro al bolsillo de los consumidores, que llevan tiempo lidiando con el encarecimiento de la factura de llenar el depósito de sus vehículos. Según los datos del último boletín petrole-

ro de la Unión Europea, el precio medio de los carburantes ha bajado esta semana un 2,3%. Pero la gasolina lo está haciendo a un ritmo mucho mayor que el diésel, y la brecha entre ambos alcanza ya los 16 céntimos.

En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha caído por tercera semana consecutiva has-

ta los 1,708 euros. Es su nivel más bajo desde mediados de abril y supone un descenso del 2,28% frente a la semana anterior. En el caso del diésel, la caída ha sido más limitada, del 2% hasta quedar en una media de 1,867 euros.

Es cierto que, en el caso del gasóleo, los niveles actuales son los más bajos desde la tercera sema-

na de agosto. Pero también que ya es la sexta semana consecutiva que el litro de este carburante supera al de la gasolina.

Las cifras del boletín petrolero incluyen los impuestos aplicados en cada país a los combustibles. Sin embargo, no tienen en cuenta medidas como, en el caso español, el descuento de 20 céntimos por litro aprobado por el Gobierno y que entró en vigor el pasado 1 de abril. Si se tiene en cuenta esta subvención, el precio del litro de gasolina sería de 1,508 euros, mientras que el del

gasóleo se situaría en los 1,667 euros, en ambos casos inferior a los registrados a finales de marzo antes de la entrada en vigor de las ayudas referidas.

A pesar del abaratamiento registrado estas últimas semanas, los carburantes mantienen un precio elevado si se compara con los últimos ejercicios a estas alturas del año. Incluso aplicando la subvención, el precio medio del litro de gasolina es un 5% más caro que hace un año, mientras que en el caso del gasóleo el precio es un 30% superior.

BOLSAS

IBEX35 7.774,70	-1,24%	DOW JONES 30.161,59	-0,07%	EUROSTOXX 3.427,14	-1,85%	NASDAQ 11.074,11	-1,30%	FTSE 100 7.159,52	-1,08%	DAX 40 12.531,63	-1,84%
---------------------------	---------------	-------------------------------	---------------	------------------------------	---------------	----------------------------	---------------	-----------------------------	---------------	----------------------------	---------------

IBEX 35

Títulos	Cierre	DIF.	Rent. 22
ACCIONA	191,600	-2,84	13,98
ACCIONA ENERGIA	40,180	-3,27	23,33
ACERINOX	8,548	-0,42	-24,92
ACS	22,520	-0,44	-4,45
AENA	111,250	-1,64	-19,85
AMADEUS	47,980	-5,25	-19,55
ARCELORMITTAL	21,785	-0,41	-23,22
B. SABADELL	0,795	4,99	34,27
B. SANTANDER	2,603	0,81	-11,49
BANKINTER	6,066	3,09	34,53
BBVA	4,900	-0,63	-6,67
CAIXABANK	3,567	1,39	47,26
CELLNEX	32,260	-4,81	-36,97
ENAGAS	17,200	0,38	-15,69
ENDESA	17,370	-1,03	-14,01
FERROVIAL	23,620	-3,04	-13,25
FLUIDRA	14,380	-5,70	-59,15
GRIFOLS	10,880	-5,56	-35,53

Títulos	Cierre	DIF.	Rent. 22
IAG	1,174	-2,57	-31,10
IBERDROLA	10,360	-1,33	-0,48
INDITEX	21,880	-0,82	-23,31
INDRA	8,000	-2,32	-15,97
INM. COLONIAL	5,140	-6,20	-37,70
MAPFRE	1,665	-0,30	-7,78
MELIÁ HOTELS	5,170	-1,90	-13,86
MERLIN PROP.	8,035	-5,58	-16,04
NATURGY	25,910	-0,77	-9,50
PHARMA MAR	56,160	-2,77	-1,51
RED ELÉCTRICA	17,175	-0,92	-9,72
REPSOL	12,000	1,01	14,99
ROVI	42,820	-3,82	-41,98
SACYR	2,150	-2,36	-5,95
SIEMENS GAMESA	17,935	-0,03	-14,88
SOLARIA	17,970	-8,60	4,96
TELEFÓNICA	3,681	-0,11	-1,56

Evolución del IBEX 35



ÍNDICES MUNDIALES

Títulos	Cierre	DIF.	Rent. 22
S&P 500	3.766,49	-0,62	-20,97
TOKIO	27.153,83	-0,58	-5,69
PARÍS	5.918,50	-1,87	-17,26
MILÁN	21.799,11	-1,07	-20,29
LISBOA	5.678,63	-1,82	1,96
ZURICH	10.297,50	-1,26	-20,02
MOSCÚ	1.174,61	6,12	-26,39
BRASIL	112.461,00	0,47	7,29
ARGENTINA	148.250,31	0,86	77,55
MÉXICO	46.228,28	-1,63	-12,68
COLOMBIA	1.201,19	0,29	-14,87
CHILE	5.304,00	-1,22	23,35
PERÚ	19.659,51	0,39	-7,08
HONG KONG	18.147,95	-1,61	-22,44
CHINA	3.108,91	-0,27	-14,10

Más plazas del Imerso para esta temporada, pero menos hoteles

L. PALACIOS

MADRID. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imerso) quiere cerrar filas en torno a la polémica generada ante el abandono de muchos hoteles a continuar con el programa y comunicó ayer que, lejos de disminuir, las plazas de los viajes para mayores se han incrementado en 28.442. En concreto, han pasado de las 816.029 previstas hasta un total de 844.471 para esta temporada.

Se respetan el número de plazas para destinos costeros e islas y se incrementan las plazas en el lote de turismo de interior, pasando de 137.475 a 165.917; es decir, 28.442 más de las previstas. Todas ellas serán circuitos culturales.

Los viajes del Programa de Turismo del Imerso se desarrollarán entre los meses de octubre de 2022 y junio de 2023. Los precios para ellos oscilarán entre los 455 euros para las estancias de diez días en zonas de costa peninsular e islas o para viajes con procedencia europea, y los 115 euros para los viajes de cuatro días en las capitales de provincia.

Los precios han sido motivo de discusión este año por la decisión del Ministerio de Derechos Sociales de congelar las tarifas, lo que provocó el malestar del sector turístico. Se ha reducido el número de hoteles participantes en el programa con respecto al año anterior hasta los 242; esto es, 28 menos que en la temporada anterior.

El programa ofrece destinos de costa peninsular de ocho y diez días en las comunidades de Cataluña, Andalucía, Murcia y Valencia, además de Canarias y Baleares. También habrá oferta de turismo de interior, con estancias de 4, 5 y 6 días.



Desempleados esperando ante una oficina del SEF, en la capital murciana. VICENTE VICENS / AGF

El empleo ya toca techo y se diluye el efecto de la reforma

Expertos perciben una «clara desaceleración» en el tercer trimestre y un repunte de bajas de empleados fijos

L. PALACIOS

MADRID. La resiliencia que el mercado laboral ha mostrado de forma sorprendente a lo largo del primer semestre del año se tambalea al tiempo que se frenan los efectos de la reforma. Ahora ya sí la guerra, la crisis de precios y los cuellos de botella comienzan a impactar también en la creación de empleo, que podría haber tocado techo y pierde ya impulso sin haber logrado los niveles previos a la pandemia en algunos de sus indicadores. Así se desprende de los datos del Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo, publicado ayer por el Ins-

tituto EY-Sagardoy de Talento e Innovación, BBVA Research y Fedea.

«Los datos del segundo trimestre muestran claramente una desaceleración y los datos del registro de afiliación de los meses de julio, agosto y la primera quincena de septiembre anticipan cierto estancamiento en el número de cotizantes», advirtió durante la presentación del informe Rafael Domenech, responsable de análisis económico de BBVA Research.

Tanto el crecimiento de los ocupados como de las horas trabajadas se moderaron entre los pasados abril y junio. Así, y pese a que la afiliación está en máximos y se han ganado más de 650.000 cotizantes respecto a 2019, los datos de julio y agosto anticipan un estancamiento del número de cotizantes en el tercer trimestre, en sintonía con la desaceleración de la economía.

Esto sucede cuando las horas trabajadas —condicionadas aún por el impacto de las bajas por covid—, los puestos de trabajo equivalentes a jornada completa y la productividad siguen sin recuperar los niveles previos a la crisis sanitaria.

El paro sí continúa su senda descendente y se sitúa en mínimos de 2008, pero no consigue bajar del 12%, marcado por el alto porcentaje de desempleados de larga duración, que rozan el 50%. Parado-

Sube el peso de los temporales mientras se frena la contratación indefinida; en especial, la de fijos discontinuos

jicamente, la tasa de vacantes sigue al alza y, pese a que España —a diferencia de Estados Unidos y de la eurozona— no ha alcanzado los máximos de 2007, sí se ha superado la media de las últimas tres décadas, según señala el informe. «Este movimiento ascendente nos indica que cada vez hay más dificultades de emparejamiento en algunos sectores de encontrar trabajadores para atender la demanda», señaló Domenech.

Otra de las sombras que observan en estos últimos meses es un freno al impacto que estaba teniendo la reforma laboral en su impulso hacia la contratación indefinida. En este sentido, pese a que el empleo fijo se sitúa en máximos históricos y la temporalidad ha caído a mínimos, el peso de los contratos temporales ha vuelto a repuntar unos diez puntos desde que alcanzara mínimos en abril. De igual manera, se aprecia una notable desaceleración de la contratación indefinida ordinaria en junio y sobre todo en agosto, que se traduce en un pequeño avance de apenas 18.000 afiliados más, un aumento similar al de 2019.

Alza del abandono voluntario

Este freno se percibe especialmente en la modalidad de fijo discontinuo, con un impacto mucho más limitado desde abril; e incluso desde junio se observan variaciones negativas en su afiliación. Esto sugiere, principalmente, que muchos de estos contratos se han rescindido o entrado en período de inactividad. Asimismo, es un reflejo del progresivo aumento de las tasas de baja en afiliación de los trabajadores con contratos indefinidos.

En concreto, la tasa de bajas de los fijos discontinuos ha repuntado con tal intensidad, que supera por primera vez a la de los temporales y la de los indefinidos ordinarios se duplica con creces respecto a la de 2019.

Este aumento se debe no solo al crecimiento de los pases a situaciones de inactividad de los fijos discontinuos, sino también al notable incremento de las dimisiones o abandonos voluntarios y de las bajas por no superar el período de prueba.

Lo tribunales

Los casi cien millones para la Justicia de la Región no alivian el déficit de juzgados

► El presidente del TSJ insiste en que se necesitan diecisiete nuevas infraestructuras en la Comunidad para «cubrir las necesidades judiciales» y para dejar de estar «por debajo de la media nacional en número de jueces»

ADRIÁN GONZÁLEZ

Los casi cien millones que ha destinado el Ministerio de Justicia en la Región de Murcia para levantar nuevos juzgados en las cuatro grandes ciudades -Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura- siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades judiciales de la Comunidad.

Así lo expuso este jueves el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, quien a pesar de mostrarse satisfecho por el «compromiso» del departamento que dirige Pilar Llop al tratarse de «la mayor inversión en infraestructuras judiciales a nivel nacional», apuntó que todavía no logra paliar el déficit material y humano que sufre el Poder Judicial en la Región.

«Con ser bienvenidos, están muy lejos de cubrir las necesidades judiciales identificadas por nuestra Sala de Gobierno, que se sitúan en diecisiete nuevos juzgados, de los que habíamos priorizado cinco para este año; lo que nos sigue dejando por debajo de la media nacional en número de jueces», manifestó el presidente del TSJ de la Región.

Las reivindicaciones de Del Riquelme se realizaron durante el solemne acto de apertura de año judicial en la Ciudad de la Justicia de Murcia, donde se dio el pistoletazo de salida a las actividades judiciales en la Comunidad durante el curso 2022-2023.

Miguel Pasqual del Riquelme recordó que durante este año se estrenó el nuevo juzgado de familia en apoyo a las personas con discapacidad, que «asegura una pronta respuesta a tan sensible colectivo» y que, a finales del próximo mes de octubre, se creará también un cuarto juzgado especializado de Lo Mercantil en Cartagena. Asimismo adelantó que en los próximos meses también se constituirán un juzgado de Lo Civil en Murcia y otro de primera

Más independencia para el Poder Judicial ante el «deterioro institucional»

► Del Riquelme reclamó la «independencia política del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)» y alertó de que actualmente se vive un «momento de fortísimo deterioro institucional de la Justicia española» cuando el órgano de los jueces «lleva más de cuatro años de interinidad y cuando el presidente del consejo ha alertado de la posibilidad de su renuncia ante el flagrante y sostenido incumplimiento de las previsiones normativas».

«Europa nos alerta de graves consecuencias por esas distorsiones inaceptables en la separación de poderes y en el respeto a la independencia. Cuando el fin se intenta hacer pasar por problemas institucionales y legales lo que no son sino meras discrepancias políticas y partidistas». Asimismo advirtió «del reiterado uso táctico de sucesivas reformas legales para limitar o ampliar competencias esenciales del órgano de Gobierno judicial al gusto y al ritmo de intereses partidistas meramente políticos».

instancia e instrucción en Lorca.

Un año más, volvió a denunciar, el «endémico déficit de recursos» que sufre la Comunidad, ya que «el servicio público de Justicia no se despliega ni se presta en igualdad de condiciones y recursos en todo el territorio español».

El presidente del TSJ de la Región reclamó la importancia de dotar a la Administración de Justicia de los «recursos humanos y técnicos que le permitan desempeñar su función en condiciones y tiempos útiles» para la ciudadanía.

Dejando de lado el espíritu más reivindicativo, también tuvo palabras de reconocimiento para todos los profesionales que forman parte de la judicatura y los servidores públicos, como fiscales, letrados de Justicia, forenses, funcionarios y personal laboral.

Asimismo reseñó el trabajo que desempeñan en los juzgados de instrucción de enjuiciamiento penal y en las secciones penales de la Audiencia Provincial para aligerar los tiempos de respuesta en la investigación y el enjuiciamiento de casos importantes que tienen que ver con la lucha de la violencia de género, los delitos contra la libertad sexual y las redes de inmigración ilegal, así como la protección de espacios medioambientales como el Mar Menor.

En defensa de los ciudadanos

Del Riquelme también indicó que la Justicia es «la última línea de defensa de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, con la certeza de que nuestros juzgados y tribunales cumplen con absoluta imparcialidad y neutralidad». Expuso que «siete de cada diez españoles ven a los jueces como la garantía última de sus derechos» y que «tres de cada cuatro ciudadanos piensan que la judicatura está bien preparada». También indicó que ocho de cada diez consideran «confiable y no aceptado por corrupción al sistema judicial».

Por último, resaltó el esfuerzo de los cuatro magistrados adicionales que desde hace cinco años resuelven los pleitos de las cláusulas suelo y que han permitido dar respuesta al 80% de las 20.000 demandas presentadas por los usuarios de la banca contra las entidades prestamistas.



Premios a magistrados, jueces decanos y servicios que ayudan en la Región

► La apertura del año judicial en la Región también sirvió para que el TSJ entregase sus reconocimientos a personas, colectivos e instituciones que durante el año han destacado por sus años de servicio y por sus actuaciones relevantes en

el ámbito de la administración de Justicia regional. En este sentido, se galardonó a los magistrados que han cumplido 25 años de antigüedad en los años 2020 y 2021: Antonio Alcázar Fajardo, Andrés Carrillo de las Heras, María Teresa

El presidente del TSJ de la Región, Miguel Pasqual del Riquelme, y el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, ayer durante el acto de apertura del año judicial en Murcia. JUAN CARLOS CAVAL

Casi un 30% más de causas abiertas por violencia contra la mujer

Hay «preocupación» por el aumento de delitos de trata de seres humanos, que se triplican en un año

A. GONZÁLEZ

Los expedientes derivados por casos de violencia contra la mujer aumentaron casi un 30% en 2021 con respecto al año anterior en la Región de Murcia. La Fiscalía apunta que, dentro de esta tipología delictiva, constan 8.343 procedimientos incoados -un 28,27% más. Respecto a las medidas cautelares, constan 65 ingresos en prisión provisional y un total de 121 órdenes de alejamiento.

En este sentido, el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, anunció que durante el pasado año se ha dado un aumento de colocación de dispositivos técnicos de control pulseras. En 2021 contaban 21 pulseras activas, aunque reconoció que «existe el problema de su implantación en algunas poblaciones de la Región donde existe escasa cobertura de señal».

Díaz Manzanera explicó que la suma total de las incoaciones fue de 80.881, un 16% más que en el año anterior. Asimismo se celebró un 56% más de juicios, un total de 9.650, que durante 2020 debido al confinamiento por la pandemia del coronavirus.

También en las sentencias au-

menta el total de las dictadas: 9.810, un 44% más. De ellas, 9.255 fueron conformes con el fiscal, es decir, un 94% de ellas.

Respecto a la evolución de la criminalidad, Díaz Manzanera apuntó que se produjo un «leve aumento» de delitos contra la vida y la integridad física, violencia doméstica y de género, contra la libertad, acoso laboral y acoso inmobiliario, libertad sexual y delitos contra el patrimonio.

En cuanto a extranjería, Díaz Manzanera mostró también su «preocupación» por los delitos de trata de seres humanos: «Constan 23 causas registradas, por las 7 del año anterior, con 25 víctimas identificadas: 11 con destino a su explotación sexual, y un escrito de

acusación, con dos sentencias de condena».

Díaz Manzanera señaló que «estamos ante falsas promesas de trabajo obligando a ejercer la prostitución» y apuntó que esta «triste realidad oculta» es considerada la «esclavitud del siglo XXI». En este sentido, anunció que para mejorar la seguridad de estas víctimas se fortaleció la figura del testigo protegido y la prueba preconstituida.

Un año más, Díaz Manzanera volvió a dar un «tirón de orejas» a los políticos con las denuncias en lo referente a los delitos contra la Administración Pública, en los que hubo un aumento de incoaciones con un 44,11%: en desobediencias, en malversación y, sobre todo, en prevaricación.

En concreto, entre 2021 y 2022 se han registrado en la Fiscalía de Murcia 58 diligencias de investigación de esta materia, siendo archivadas 33 (lo que supone un 57% del total), de las 35 son por prevaricación (con 23 archivos: un 66%). Los denunciados han sido partidos políticos en 7 casos, además de 29 de particulares, y 13 de funcionarios.

«Estas denuncias en su mayor parte no deberían de haberse presentado, atendiendo a los nulos indicios de criminalidad», recaló Díaz Manzanera, para quien «evidentemente ha de ser rechazable si alguna de esas denuncias estuviese guiada en buscar básicamente el efecto mediático».

El número de juicios celebrados en 2021 aumenta un 56% con respecto al año anterior por el confinamiento

El 66% de las denuncias por prevaricación fueron archivadas: «No se tendrían que haber presentado»

La Fiscalía murciana, la que más carga de trabajo soporta del país

23.070 habitantes.

Así lo expuso en el acto de apertura del año judicial el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, que estimó que en la Comunidad faltarían unos 15 fiscales para equiparar la media a la nacional, aunque, recordó, ya se han otorgado cuatro plazas en el último concurso.

En cuanto a los funcionarios, la Fiscalía de Murcia «es la peor dotada de España con una ratio funcionario-fiscal de 0,45,

cualquier fiscalía que tienen una ratio de un funcionario por fiscal», señaló Díaz Manzanera.

En este sentido, insistió en que es «trascendental» incrementar las plantillas en todos los ámbitos profesionales de la Justicia «si queremos mejorar en los plazos de respuesta judicial que actualmente son de una tardanza inaceptable».

Antes de terminar su discurso, el fiscal superior resaltó que la Fiscalía «sigue consolidando un esfuerzo de apertura a todas las instituciones públicas y privadas, así como a todos los ciudadanos», a través de la campaña de apertura de la Fiscalía a la sociedad murciana, que se inició en diciembre de 2020 y que es «única en España».

Díaz Manzanera apunta que harían falta unos 15 fiscales para alcanzar la media nacional

A.G.F.

La Fiscalía Superior de la Región de Murcia es la primera del país en carga de trabajo. Actualmente, en la Comunidad se cuenta con un fiscal por cada

Clavo García, Juan González Rodríguez, Francisco Navarro Campillo, José Guillermo Nogales Cejudo, María Teresa Nortes Ros, Rafael Fuentes Devesa y María del Carmen Orenes Barquero.

Los Jueces-magistrados decanos de los once partidos judiciales de la Región, Lorenzo Hernando Bautista, María del Mar Gómez Hernández, Ricardo Cuevas, Carmen de las Nieves Martín, María Luisa González, Marta Rodríguez y María Ascensión Andreu. También fue premiada la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de la Región de Murcia, el equipo de auxiliares de la Sección 3ª del Servicio Común General Procesal (SCGP) de Murcia, el Servicio Común Procesal de Ejecución, el equipo GRUME de la Policía y Francisco Pérez Mateos, funcionario del Parque Móvil del Estado. Por último, fueron galardonadas las periodistas Ana Lucas, redactora de Sucesos y Tribunales de La Opinión, y Alicia Negre «por su trabajo en el ámbito del periodismo de tribunales, una rama especializada, presidido por el rigor, la ética y la honestidad».

Lo economía

Miras se apunta al carro de Andalucía y decide eliminar Patrimonio

► El presidente, que hasta ahora ha defendido las bonificaciones a los contribuyentes ricos, dice en TVE que quiere quitar el impuesto en 2023

M.J.G./E.P.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, también se está planteando ahora suprimir el Impuesto de Patrimonio el próximo año, tal y como ha anunciado su homólogo andaluz, Juan Manuel Moreno. López Miras había mantenido hasta ahora que su intención era ofrecer exenciones a los contribuyentes obligados a declarar, y así lo recordó el pasado viernes durante su intervención en una jornada de las empresas familiares a la que asistió el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero este jueves ha anunciado en una entrevista concedida a 'La Hora de la 1' de TVE que «muy probablemente» eliminará Patrimonio en 2023.

Sin embargo, el anuncio del presidente andaluz, que presume de querer convertir a Andalucía en la comunidad con una menor fiscalidad después de Madrid y de atraer a los contribuyentes ricos para ingresar más en IRPF, ha llevado al jefe del Ejecutivo regional a apuntarse al carro de las rebajas fiscales y la supresión de Patrimonio en un año preelectoral, en el que todos los candidatos quieren regalarle los oídos a los votantes.

De hecho, el miércoles anunció también la deflacción del tramo autonómico del IRPF para compensar la inflación, que supondrá una rebaja del 4,1%, aunque los verdaderos beneficiarios serán los contribuyentes con ingresos más altos. Esta rebaja supondrá un des-

censo en los ingresos de la Comunidad de 10 millones de euros, según indicó el presidente.

En sus declaraciones a TVE López Miras avanzó que antes de tomar la decisión de suprimir Patrimonio habrá que hacer cuentas para ver si la pérdida de los ingresos que aporta este tributo pueden compensarse con «los ingresos extraordinarios» que lleguen a la Comunidad. «Ni nosotros, ni ningún otro gobierno, puede tomar una decisión de esa trascendencia sin que cuadren las cuentas», admitió. Por ello, señaló que su Ejecutivo está «cuadrando la previsión de ingresos y lo que supone el Impuesto de Patrimonio en la Región».

Sin embargo, la Comunidad



Fernando López Miras

El jefe del Ejecutivo regional descarta, sin embargo, una posible fuga de las fortunas de la Región a Almería

cuenta con obtener unos ingresos extraordinarios el próximo año con las liquidaciones de 2021, año en el que se alcanzó una recaudación superior a la que aportó el Ministerio de Hacienda a través de las entregas a cuenta a lo largo del

ejercicio, según avanzó la Alref.

López Miras también negaba ayer que la supresión del Impuesto de Patrimonio en Andalucía pueda dar lugar a una fuga de los contribuyentes con grandes fortunas a las provincias vecinas, sobre todo a Almería, tal y como avanzó La Opinión tras la decisión de Moreno Bonilla. «La Región es muy competitiva fiscalmente y está al mismo nivel que otras comunidades como Andalucía o Madrid», aseguró López Miras.

Puso como ejemplo la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en el tercer grado. «Cuando nos vamos al listado de competición fiscal, Murcia es competitiva en esta menor presión fiscal», indicó. Por ello, considera que «no hay motivos para que alguien quiera irse a otra comunidad si es por motivos fiscales».

Ante la posibilidad de que el Gobierno central implante un impuesto para las grandes fortunas, López Miras ha apostado por «bajar impuestos y estimular la actividad económica». «Si le subimos los impuestos a aquellos que puedan crear oportunidades a través de la inversión, esa no es la fórmula a seguir y lo estamos viendo en el resto de Europa». A su juicio, «el objetivo no es que haya menos ricos, sino menos pobres».

CC OO dice que la caída de ingresos generará recortes en sanidad y educación

► El sindicato recuerda que los 200.000 trabajadores con el salario mínimo no se beneficiarán del ahorro fiscal

M.J.G.

El secretario general de CC OO, Santiago Navarro, critica la rebaja del IRPF del 4,1% anunciada por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, para compensar el impacto de la inflación y advierte de que la caída de los ingresos de la Comunidad Autónoma se traducirá en un recorte de «los servicios que presta la sanidad, la educación o la dependencia».

Santiago Navarro remite a los cálculos realizados por la organización de técnicos de Hacienda Gestha, que ponen de manifiesto el escaso número de contribuyentes que podrán beneficiarse realmente de la rebaja tributaria. Gestha concluye que el 18,5% de

los salarios por encima de 34.000 euros acumularían el 41,9% de la rebaja fiscal, mientras que las familias con menos ingresos apenas se beneficiarán.

Precisó que mientras se reducen los ingresos en las arcas regionales, «la educación pública se enfrenta a uno de los peores cursos que se recuerda» y que «el Servicio Murciano de Salud ha perdido una buena oportunidad de crear nuevos puestos de trabajo y de cubrir con trabajadores estables las cerca de 1.600 vacantes, que llevan años renovándose en periodos anuales o semestrales».

Los convenios firmados este año recogen una subida salarial del 2,16%, mientras que la inflación repunta el 11%

El sindicato reclama la consolidación de estos puestos, en los que la Ley de Estabilización de las plantillas ya no permite mantener la rotación de contratos.

Añadió que, mientras tanto, la alta inflación está reduciendo la capacidad de consumo de las familias de la Región, dado que los trabajadores murcianos reciben «el 87% del salario medio de España».

El secretario de Empleo del sindicato, Víctor Romera, apuntó que los convenios firmados este año en la Región recogen un incremento salarial del 2,16%, cuando los precios han subido un 11% en el último año y la inflación acumulada desde enero alcanza el 6,4%. «Los convenios están muy por debajo de la inflación, que afecta sobre todo a los sectores con los salarios más bajos».

Romera recordó igualmente que unos 200.000 trabajadores, que representan casi la tercera parte de los ocupados, cobran el



Víctor Romera y Santiago Navarro.

cc oo

«Un otoño caliente», con protestas que se extenderán a 2023

► El elevado número de convenios colectivos sin firmar que llevan años de negociación infructuosa, como el de la hoste-

lería, allenta las protestas previstas para los próximos meses. El secretario general de Comisiones Obreras, Santiago Navarro, augura «un otoño caliente», con movilizaciones de los sectores sin convenio, que se extenderán al próximo año. Navarro recordó que en la Región hay 31 convenios caducados de los 43 que están activos.

salario mínimo interprofesional. Apuntaron igualmente que el número de muertos en accidente

laboral ha aumentado un 73,52% en lo que va de año y que ya se superan las cifras de todo 2021.

Lo medio ambiente

La ILP aboca a una nueva reforma de la Ley regional del Mar Menor

► Ministerio y expertos creen necesario que la Comunidad modifique la norma autonómica para evitar el solapamiento de competencias y funciones entre los representantes de la laguna y reforzar así sus derechos

ALBERTO SÁNCHEZ

■ ¿A quién le toca mover ficha ahora para hacer realidad el texto de la ILP del Mar Menor? En los próximos días el Boletín Oficial del Estado recogerá la nueva 'Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca' que el Senado aprobó este miércoles. Serán en ese momento cuando entren en vigor los derechos propios de la laguna, entre los que se encuentra el derecho a existir, a la protección, a la conservación y a la restauración. Pero también se deberá poner en marcha un mecanismo por el que se garantice la nueva representación y gobernanza de la laguna, recogido en uno de sus artículos.

Tanto la Ley regional del Mar Menor como la norma recién aprobada plantean la creación o regulación de diferentes comités o consejos que abarcan la parte científica, la administrativa o la representación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre la laguna. Estos órganos de representación chocarían entre sí ahora pues abarcarían las mismas competencias o funciones. La nueva norma no elimina ni obliga a modificar la ley que la Asamblea regional aprobó en 2020, pero, en opinión del Ministerio para la Transición Ecológica, sí sería conveniente modificarla para que recoja el articulado de la ILP y evitar que exista el solapamiento de poderes.

En opinión de Santiago Álvarez Carreño, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia y experto en legislación ambiental, la ley regional sí debería modificarse ya que la ILP plantea «un 155 ambiental (en referencia al artículo de la Constitución que prevé qué hacer si una Comunidad Autónoma incumple la Carta Magna o alguna ley estatal) en relación con las competencias del Gobierno regional». La normativa regional ya ha sido modificada en otras ocasiones, cambios que incluso han llegado al Tribunal Constitucional por el desacuerdo entre Estado y Gobierno regional en la cuestión de la restitución de los re-

El consejero Luengo esperará a que Transición Ecológica aclare qué aspectos legales habrá que cambiar

La nueva ley, que tiene competencias sobre la gobernanza del Mar Menor, plantea la creación de tres comités

gadílos ilegales.

Pelea entre administraciones

Por otro lado, el consejero de Medio Ambiente de Murcia, Antonio Luengo, condicionó el desarrollo de la ILP a que «el Ministerio lleve a cabo el ordenamiento jurídico necesario para poder aplicarla con la máxima celeridad y que pueda valorar el alcance que tiene a las diferentes normativas que hay vigentes». En este punto no está de acuerdo Transición Ecológica, ya que las competencias sobre medio ambiente, agricultura u ordenamiento del territorio, aspectos estos dos últimos que han resultado dañinos para el Mar Menor, son autonómicas. El Ministerio, señalan fuentes consultadas, sí se involucra en la creación de los nuevos comités junto a los promotores.

El profesor Carreño ve una deficiencia importante en los primeros pasos que debe dar la ILP y qué cambios deberá haber en el ordenamiento jurídico español. «La vaguedad de la disposición derogatoria de la ILP, que pretende dejar sin efecto toda norma de igual o inferior rango que contravenga las escasas disposiciones que tiene la nueva norma, no ha permitido evaluar, en opinión del experto, el impacto que tendrá sobre leyes estatales como la protección del patrimonio natural, la Ley de Aguas, de Costas, la de Responsabi-

lidad Ambiental, el Código Civil o incluso la Ley regional de la laguna. «La ILP guarda silencio sobre la integración de la iniciativa con el Derecho ambiental preexistente, lo cual va a generar relevantes interrogantes».

Tres meses para crear un comité

En el caso de la primera ley, la gobernanza sobre el Mar Menor plantea una comisión interadministrativa entre la Comunidad, el Estado y los ayuntamientos ribereños; un Consejo social del Mar Menor que notifique de arrancar; el Comité Científico que se reúne periódicamente y una Comisión interdepartamental que dirige la Consejería de Medio Ambiente. A esto hay que sumar otros equipos o grupos de trabajo creados en los últimos meses como el Observatorio del Mar Menor o el Comité de Seguimiento que se cita cada 15 días.

La nueva ley, que también tiene competencias sobre la gobernanza del Mar Menor, plantea la creación de tres comités. El primero, uno de representantes formado por tres miembros del Estado, otros tres de la Comunidad Autónoma y siete que darán voz a la ciudadanía. Este comité, cuya sede la quiere conseguir el Ayuntamiento de Los Alcázares, tendrá entre sus funciones la de proponer actuaciones de protección, conservación, mantenimiento y restauración de la laguna, así como vigilar el cumplimiento de los derechos.

Un segundo comité será de Seguimiento y estará formado por los 'guardianes' del Mar Menor. Cada ayuntamiento designará a un representante oficial, que estará acompañado por los representantes de los sectores económicos, sociales y ambientales implicados en la laguna. Para la creación de este órgano corre prisa, pues la ley recoge que deberá estar creado en tres meses. Por último, habrá un comité científico con expertos del Instituto Español de Oceanografía, las universidades de la Región de Murcia y Alicante o el CSIC.



Ciudadanos reclamará a la Comisión Europea que blinde la ILP

El grupo de Cs en el Parlamento Europeo presenta una batería de enmiendas al informe de la laguna

A.S.

■ La eurodiputada de Ciudadanos, Soraya Rodríguez, registrará este viernes una batería de enmiendas al informe que prepara el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo sobre el Mar Menor para que se audite el tratamiento de aguas residuales de los ayuntamientos que vierten a la laguna, asegurar que se cumple la iniciativa Legislativa Popular recién aprobada esta semana o renaturalizar la desembocadura del Albujón.

El debate de enmiendas tendrá lugar en las próximas semanas y el texto será aprobado definitivamente el 25 de octubre. Las enmiendas de los liberales, preparadas junto con Cs en la Región, «buscan mejorar el informe y cubrir aspectos importantes en un problema con múltiples causas», señalan desde la formación.

Así, Cs plantea que se auditen las plantas y sistemas de tratamiento de aguas residuales de todos los Ayuntamientos que vierten al Mar Menor, estableciendo acciones a corto y medio plazo que tengan que desarrollar las autoridades locales y regionales.

Además, Ciudadanos propondrá que la Eurocámara reclame el desarrollo de la ILP. «Tememos que el PP ceda ante la presión de Vox y busque una excusa para derogar la recién aprobada ILP del Mar Menor si llega al gobierno, y queremos que la Comisión Europea diga alto y claro que la ILP hay que protegerla, desarrollarla y defenderla de cualquier ataque», señala María José Ros, coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Región de Murcia. A su vez, la formación quiere que la Comisión Europea sea muy clara sobre la necesidad de actuar sobre el origen del problema, los nitratos de la agricultura ilegal, y no solamente sobre las consecuencias. Al mismo tiempo, reclamará impulsar los tratamientos de eliminación de nitratos y fosfatos en las aguas extraídas del acuífero que vayan a reutilizarse en la agricultura.

Isabel Franco exige el desbloqueo de 27 millones de fondos europeos

► La vicepresidenta reclama la participación del Ministerio de Hacienda en el Consejo de Servicios Sociales para aclarar las dudas que han impedido aprobar los créditos destinados a Murcia

REDACCIÓN

El Gobierno regional ha exigido este jueves en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que el Ministerio de Hacienda participe en las reuniones y que se hagan de forma presencial y no por correo electrónico. La vicepresidenta del Ejecutivo regional, Isabel Franco, reclama la participación de responsables del Ministerio de María Jesús Montero para aclarar las dudas que han impedido aprobar unos créditos necesarios para que Murcia pueda recibir 27 millones de euros. En un comunicado oficial, la consejera de

Política Social afirma que la propuesta cuenta con el apoyo de la gran mayoría de comunidades.

«Solo podremos avanzar en solucionar algunas dudas que se llevan meses planteando y esperando que se aclaren, sin que hasta el momento se haya conseguido», indica la vicepresidenta.

Cree que la solicitud se hace «aún más necesaria teniendo en cuenta que la ausencia de la ministra de Servicios Sociales, Ione Barrena, empieza a ser tónica habitual», cuando lo que las comunidades necesitan es «ese nivel de interlocución». Se queja de que las dudas han provocado el aplazamiento

de la votación a favor de los créditos para la financiación de proyectos de inversión en el marco del componente 22 'Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social' del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los que Murcia recibirá algo más de 27 millones de euros.

Añade que la Comunidad se ha mostrado conforme con la financiación, no así con los criterios incorporados en un nuevo anexo que modifica las condiciones pactadas en el convenio de colaboración suscrito con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 el pasado mes de noviembre, de forma «sustancial, unilateral y lesiva para los intereses de la Región».

Muestra el compromiso del Gobierno regional con la ejecución de los fondos europeos, «siempre y cuando no se tenga en cuenta o se



Isabel Franco

modifique el contenido del anexo en el que varían las condiciones de ejecución de las inversiones previstas en el convenio, y cuya aplicación dificulta gravemente la viabilidad de las inversiones aprobadas. «Trabajamos con proyectos de gran envergadura que deben servir para toda la población», concluyó.

La consejera se queja de que la discrepancia en la aplicación de los acuerdos han obligado a aplazar la votación



Instalaciones de la planta desaladora de Águilas, perteneciente a Acuamed.

ACUAMED

La Audiencia Nacional mantiene como imputado a un directivo de la trama de Acuamed

► Rechaza la petición del acusado de pagar viajes para concertar contratos de la desaladora de Águilas

TONO CALLEJA

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado mantener la imputación del que fuera comercial de la empresa No-

ksel España S.A., Manuel Moreno, considerado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como uno de los tres integrantes del «escalón principal» de la trama desmantelada con el caso Acuamed, que se extendió a la desaladora de Águilas. En esta trama también se sitúa al entonces director general de la empresa pública Agua de las Cuencas Mediterráneas (Acua-

med), Arcadio Mateo, y al ex alto cargo de la sociedad pública Trasagua Nicolás Steegmann.

Manuel Moreno fue detenido por la UCO por su presunta intervención en el contrato del sistema de dotación de agua entre el embalse de Cerro Colorado y el Valle del Guadalentín, entre otros. Está acusado de pagar 14 viajes en avión a Turquía y a varias ciudades españolas al entonces direc-

tor general de la empresa pública y a su familia a cambio de concertar los contratos.

Los magistrados apuntan también a la posibilidad de que esta «dinámica defraudatoria» detectada en la desaladora de la Región también pudo haberse producido en otras obras públicas. Como por ejemplo en la compra de tuberías para la planta desaladora del Campo Dalías, Balsas del Cañuelo y La Redonda, en Almería, y en los contratos del tramo seis del Ramal del Cañarico y de las obras de desglosado del proyecto de construcción de la conducción de distribución de la planta de Águilas para la comunidad de regantes de Puerto Lumbreras.

La UCO considera que los integrantes de la trama generaron un «sobre-abono fraudulento» de elevadas cantidades económicas a sociedades privadas, «así como el cobro de comisiones en especie [...] al imponer la compra de la tubería a determinados fabricantes (Noksel- STS Tubular Group)».

Los magistrados rechazan de la petición del imputado, que quería que se archivara su caso, pues consideran, en consonancia con las pesquisas de la UCO, que la investigación ha aportado suficientes indicios de que este empresario ha podido cometer los delitos de cohecho, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y falsedad documental a través de Acuamed, una sociedad pública que se encargaba de la construcción de desaladoras.

El rol de Manuel Moreno Maestre en esta operativa, relatan los informes de la UCO, consistía en hacer de intermediario entre

Manuel Moreno fue detenido por su intervención en los contratos de Cerro Colorado al Guadalentín

Los magistrados consideran que ha podido cometer cohecho, tráfico de influencias y corrupción

las dos empresas fabricantes de tubería en España (STS-Noksel) y Arcadio Mateo, «con el que mantenía una relación de amistad». Y para la construcción de la obra, Acuamed impulsó que las tuberías tenían que ser compradas a Noksel. Por eso, concluye la Policía Judicial, la intervención del director general de la empresa pública en los contratos estaba motivada «por el beneficio personal que obtiene este de Noksel a través de Manuel Moreno Maestre».

La operativa era la siguiente. En primera instancia Moreno Maestre pactó con el representante de la firma STS las ofertas a realizar a los contratistas: «Repartiéndose entre ambos las ventas en el mercado acordando en cada contrato quién será el vendedor para cada uno de ellos, para posteriormente trasladárselo a Arcadio Mateo, para que este impartiera las instrucciones necesarias al contratista sobre a quién debe comprar la tubería», dice la Policía Judicial.

El impuesto a las grandes fortunas será temporal y entrará en vigor en 2023

► La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sostiene que la obligación de pago entrará en vigor el año que viene, pero no aclara si afectará ya al ejercicio 2022 ► «Lo importante es que el Gobierno está pidiendo un mayor esfuerzo a los que más tienen», apunta

ROSA MARÍA SÁNCHEZ, MADRID

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que el nuevo gravamen sobre grandes fortunas sobre el que está trabajando el Gobierno tendrá carácter temporal. «Igual que ha ocurrido con el impuesto a las energéticas y el impuesto a la banca, trabajaremos en una fórmula temporal y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarlo», aclaró la ministra en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, tras participar en el debate sobre el techo de gasto pre-

supuestario para 2023. Está previsto que los nuevos impuestos sobre banca y energéticas se liquiden en 2023 y 2024.

Montero también afirmó que la obligación de pagar el nuevo gravamen sobre grandes fortunas entrará en vigor el 1 de enero de 2023 aunque no ha aclarado si ya afectará a los datos económicos de 2022, como es el caso de los nuevos impuestos sobre la banca y la energética, que se pagarán el año próximo sobre resultados económicos del ejercicio actual. Tampoco ha aclarado si la nueva fórmula tomará como base la

propuesta de Unidas Podemos de incorporar una mayor tributación para patrimonios a partir de 10 millones de euros; ni siquiera ha precisado si se tratará de un nuevo tributo (lo cual requeriría una nueva ley) o un ajuste sobre algún impuesto ya vigente (lo cual podría ser incorporado en el proyecto de Presupuestos para 2023).

«No todo puede ir en Presupuestos», comentó Montero, después de pedir «dejar trabajar a los técnicos» en una propuesta de gravamen.

En todo caso, lo que sí ha querido subrayar la titular de Hacienda es

que «lo importante es que el Gobierno está pidiendo un mayor esfuerzo a los que más tienen para proteger a la clase media de nuestro país a la clase trabajadora y a la población

El Gobierno decidirá a final de año si prorroga las medidas anticrisis y si adopta algunas nuevas para 2023

más vulnerable». Montero volvió a criticar la iniciativa del Gobierno de Andalucía de bonificar al 100% el impuesto sobre el Patrimonio y de rebajar el 4,3% la tarifa autonómica del IRPF para corregir el impacto de la inflación, una iniciativa a la que también se ha sumado Murcia. «Me parece una enorme irresponsabilidad que comunidades autónomas que están pidiendo permanentemente más dinero al Gobierno de España decidan renunciar a recaudación en el marco de sus competencias», agregó.

Reglas de estabilidad

El Congreso debatió ayer la propuesta del Gobierno de volver a dejar en suspenso en 2023 las reglas de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con el marco dispuesto por la Comisión Europea en el actual contexto de crisis energética por la guerra en Ucrania. A partir de la suspensión de las reglas fiscales, el Gobierno ha fijado un techo de gasto presupuestario para 2023 de 198.221 millones, el 1,1% más que en 2022. Sin incluir los recursos europeos de fondo 'Next Generation' el techo de gasto asciende a 173.065 millones, el 1,9% más que en 2022. También hay una transferencia de 19.888 millones para la Seguridad Social, lo que supone un alza del 8,1% con respecto a este año.

La ministra dijo que cuando se aproxime el final de 2022 el Gobierno decidirá si prorroga algunas de las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno desde mediados del año pasado en respuesta a la crisis energética (cuyo importe total ha cifrado en 30.000 millones o si adopta algunas nuevas. En todo caso, el impacto presupuestario de unas u otras se situará por encima del techo de gasto de 198.221 millones.



María Jesús Montero, Ministra de Hacienda, ayer, en el Congreso.

EDUARDO PARRA/E.P.

Garamendi acusa a Yolanda Díaz de promover un «cártel» del comercio

SARA LEDO, MADRID

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, volvió a calificar de «programación soviética» la propuesta de la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de establecer topes a los precios de los alimentos con una cesta de la compra de productos baratos

y acusó a Díaz de promover acuerdos entre empresas para restringir la competencia. «Parece mentira que un miembro del Gobierno promueva un cártel», advirtió Garamendi, en la clausura de la Asamblea Anual de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), que agrupa a grandes super-

mercados como Carrefour, Costco, Eroski, Alcampo y El Corte Inglés.

No ha tenido muy buena acogida la propuesta de Díaz. Los grandes establecimientos, pequeños y medianos la rechazaron de pleno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) salió en medio del debate para advertir

de que poner precios máximos a los alimentos está prohibido por ley. Tanto la Ley de defensa de la competencia como el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea «prohíben expresamente los acuerdos o recomendaciones de fijación de precios u otras condiciones comerciales que restrinjan o falseen la competencia».

En este sentido, Garamendi, insistió en que «es increíble que en un país moderno de Europa se planteen» topes de precios. Y si no hay tope, vino a decir el empresario, el

Gobierno pide a las empresas precios bajos para mejorar su «reputación», algo que ha calificado de «peligrosísimo».

Competencia advierte de que poner precios máximos a los alimentos está prohibido por ley